



— REPUBLICA ARGENTINA —

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

26^a REUNION – 24^a SESION ORDINARIA

1° DE NOVIEMBRE DE 2006

**Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don DANIEL O. SCIOLI,
del señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor JOSE J. B. PAMPURO
y del señor vicepresidente del Honorable Senado, doctor MARCELO E. LOPEZ ARIAS**

SECRETARIOS:

Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI

PROSECRETARIOS:

**Señor JUAN J. CANALS, señor NESTOR H. RIGHETTI
y señor RICARDO N. GUTIERREZ**



PRESENTES:

BAR, Graciela Yolanda
 BASUALDO, Ricardo G.
 BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
 BUSSI, Ricardo Argentino
 CAPITANICH, Jorge Milton
 CAPOS, Liliana
 CASTRO, María Elisa
 CURRETTI, Miriam Belén
 DANIELE, Mario Domingo
 ESCUDERO, Sonia Margarita
 FALCÓ, Luis
 FELLNER, Lilia na B.
 FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
 FERNÁNDEZ, Nicolás Alejandro
 GALLEGO, Silvia Ester
 GALLIA, Sergio Adrián
 GIOJA, César A.
 GIRI, Haide Delia
 GIUSTI, Silvia Ester
 GIUSTINIANI, Rubén Héctor
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda
 GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio
 IBARRA, Vilma Lidia
 ISIDORI, Amanda Mercedes
 JAQUE, Celso Alejandro
 JENEFES, Guillermo Raúl
 LATORRE, Roxana Itatí
 LEGUIZAMÓN, María Laura
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
 MARINO, Juan Carlos
 MASSONI, Norberto
 MASTANDREA, Alicia Ester
 MAYANS, Miguel Ángel
 MAZA, Ada Mercedes
 MENEM, Carlos S.
 MERA, Mario Rubén
 MIRANDA, Julio Antonio
 MORALES, Gerardo Rubén

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
 PAMPURO, José J. B.
 PERCEVAL, María Cristina
 PERSICO, Daniel Raúl
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PINCHETTI DE SIERRA MORALES, D.
 QUINTELA, Teresita N.
 REUTEMANN, Carlos Alberto
 RIOFRÍO, Marina Raquel
 RÍOS, Roberto Fabián
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
 ROSSI, Carlos Alberto
 SAADI, Ramón Eduardo
 SANZ, Ernesto Ricardo
 TAFFAREL, Ricardo César
 URQUÍA, Roberto Daniel
 VIANA, Luis A.
 VIUDES, Isabel J.
 ZAVALÍA, José L.

AUSENTES CON AVISO:

CAPARRÓS, Mabel Luisa
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 CLOSS, Marice F.
 COLOMBO, María Teresita
 MARÍN, Rubén Hugo
 MARTÍNEZ, Alfredo A.
 MARTÍNEZ PASS DE CRESTO, Laura
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.
 SALVATORI, Pedro
 SÁNCHEZ, María Dora
 SAPAG, Luz María
 VIGO, Elida M.

EN COMISIÓN:

TERRAGNO, Rodolfo

LICENCIA:

KIRCHNER, Alicia M. A.

SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto.** (Pág. 6.)
2. **Homenaje al Día de la Recuperación Democrática.** (Pág. 6.)
3. **Moción de tratamiento sobre tablas.** (Pág. 6.)
4. **Plan de labor parlamentaria.** (Pág. 7.)
5. **Asuntos entrados.** (Pág. 9.)
6. **Cuestión de privilegio.** (Pág. 10.)
7. **Manifestaciones.** (Pág. 15.)
8. **Consideración en conjunto de órdenes del día.** (Pág. 16.)
 - O.D. 965: Día Nacional de la Conciencia Ambiental. (Pág. 483.)
 - O.D. 966: Pedido de informes sobre la implementación del proyecto de saneamiento de la cuenca Salí-Dulce. (Pág. 484.)
 - O.D. 967: Pedido de informes sobre la exportación de agua. (Pág. 485.)
 - O.D. 968: Beneplácito por la inauguración del Centro de Salud Mental “Malvinas Argentinas” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Pág. 486.)

- versas zonas de Calingasta, San Juan. (Pág. 560.)
- O.D. 975: Evaluación de la tecnología informática en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. (Pág. 561.)
- O.D. 976: Cuarto Proyecto de Protección Social. (Pág. 568.)
- O.D. 977: Banco de la Nación Argentina, fideicomiso Bisel. (Pág. 591.)
- O.D. 978: Programa Global de Crédito para las Micro y Pequeñas Empresas. (Pág. 594.)
- O.D. 979: Proyectos de Gestión de la Contaminación y de la Gestión Ambiental. (Pág. 603.)
- O.D. 980: Lotería Nacional Sociedad del Estado. (Pág. 607.)
- O.D. 981: Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales. (Pág. 608.)
- O.D. 997: Auditoría en la Secretaría de Energía. (Pág. 610.)
- O.D. 998: Proyecto de Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Mendoza. (Pág. 615.)
- O.D. 999: Secretaría de Energía y Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor. (Pág. 618.)
- O.D. 1.003: Empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima. (Pág. 624.)
9. **Informe sobre el Parlatino.** (Pág. 19.)
10. **Consideración de órdenes del día con proyectos ley.** (Pág. 20.)
11. **O.D. 1.001: Autorizaciones para desempeñar cargos consulares honorarios.** (Pág. 20.)
12. **O.D. 1.002: Autorizaciones para desempeñar cargos consulares honorarios.** (Pág. 20.)
13. **O.D. 1.022: Protocolo complementario del Convenio de Seguridad Social con el Reino de España.** (Pág. 20.)
14. **O.D. 1.023: Acuerdo comercial con la República Argentina Democrática y Popular.** (Pág. 21.)
15. **O.D. 1.024: Convenio Marco de Cooperación en Materia de Salud y Ciencias Médicas con el gobierno de la República Popular China.** (Pág. 21.)
16. **O.D. 1.025: Acuerdo de Cooperación en Materia Veterinaria con la República de Turquía.** (Pág. 21.)
17. **O.D. 1.026: Aprobación del Acuerdo para la Concesión de Residencias Transitorias o Temporarias con la República Federativa del Brasil.** (Pág. 22.)
18. **O.D. 1.027: Aprobación de los Instrumentos de Enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.** (Pág. 22.)
19. **O.D. 1.021: Creación del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 en Resistencia, Chaco.** (Pág. 22.)
20. **S.-1.493/06: Creación de un juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz.** (Pág. 23.)
21. **O.D. 1.019: Creación de un juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Corrientes.** (Pág. 23.)
22. **O.D. 1.020: Creación de tres tribunales orales de menores con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cinco tribunales orales de menores junto con las fiscalías, defensorías y equipos interdisciplinarios correspondientes, en el ámbito de la Capital Federal.** (Pág. 24.)
23. **P.E.-852/04: Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.** (Pág. 24.)
24. **S.-3.940/06: Deudores hipotecarios.** (Pág. 56.)
25. **S.-3.906/06: Constitución de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en la ciudad de San Juan - Constitución de la Cámara en comisión.** (Pág. 69.)
26. **Apéndice.** (Pág. 70.)
- Nota:* Los proyectos, órdenes del día, actas de votaciones electrónicas, sanciones y demás documentación que acompaña la presente versión taquigráfica obran en el apéndice.
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 59 del miércoles 1º de noviembre de 2006:

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador Mario Domingo Daniele a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los presentes, el señor senador Daniele procede a izar la bandera en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

HOMENAJE AL DIA DE LA RECUPERACION DEMOCRATICA

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir homenaje al Día de la Recuperación Democrática, habiendo sido presentados a tal efecto diversos proyectos sobre el particular.¹ Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.

–El texto es el siguiente:

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del 23° aniversario del retorno de la democracia y la recuperación de la soberanía popular, ejercida por el pueblo argentino el 30 de octubre de 1983, cerrando en ese acto la larga noche dictatorial establecida en marzo de 1976 e iniciando el tránsito hacia el ejercicio pleno del Estado de derecho, las garantías de un Estado democrático y por ser ella la principal garantía del correcto funcionamiento de las instituciones, de la libre manifestación del pueblo mediante la elección de sus representantes y la base esencial de la manifestación del pensamiento.

Sr. Presidente. – En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.² Se procederá en consecuencia.

3

MOCION DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sr. Morales. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: desde nuestro bloque, hemos presentado un proyecto de declaración en el día de la fecha, que se tramita con el número S.-3.945. Con esta iniciativa se busca una declaración política de esta Cámara.

Voy a fundamentar brevemente, como lo establece el reglamento, nuestro pedido para que, en este momento, sea tratado sobre tablas.

Esta declaración tiene que ver con tres puntos. El primero de ellos propone el rechazo por parte de esta Cámara de cualquier intento de modificación de las constituciones provinciales en la medida en que tenga como objeto la búsqueda de la hegemonía a través de reelecciones indefinidas del primer mandatario, ya que las mismas se alejan de los principios republicanos de alternancia en el ejercicio del Poder Ejecutivo.

Entendemos que es una necesaria definición, una declaración política por parte del Congreso de la Nación en la medida en que se presentan casos como la provincia de Buenos Aires, donde también se intenta –y el planteo está hecho en el proyecto de declaración– una interpretación de la Constitución provincial para habilitar un nuevo mandato o el caso de la provincia de Jujuy que, en el marco general que plantea el proyecto, propicia una reforma de su Constitución. Reforma que, a nuestro criterio, apunta a deteriorar la calidad institucional y a conseguir nuevos mandatos para los que detentan el Poder Ejecutivo. Además, en el caso de Jujuy, debo decir que se da con la agravante de modificar el sistema electoral a la medida de otras provincias que ya han deteriorado la calidad de sus instituciones.

Entendemos que debemos considerar esta cuestión a partir de lo que ha ocurrido en Misiones, donde se dio una situación lamentable a partir de la utilización del camino de la reforma de la Constitución como método para concentrar poder y legitimar indefinidamente los mandatos de los gobernadores. Además, tampoco puede dejarse de lado lo que ha pasado durante el trámite electoral.

En virtud de estas cuestiones, reitero que entendemos que debe haber alguna declaración

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

22

**ORDEN DEL DIA N° 1.020: CREACION DE
TRES TRIBUNALES ORALES
DE MENORES CON ASIENTO EN LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y CINCO
TRIBUNALES ORALES DE MENORES
JUNTO CON LAS FISCALIAS, DEFENSORIAS
Y EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS
CORRESPONDIENTES EN EL AMBITO
DE LA CAPITAL FEDERAL**

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley de la señora senadora Ibarra (I) y del señor senador Menem (II) por los que se crean tres tribunales orales de menores con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cinco tribunales orales de menores junto con las fiscalías, defensorías y equipos interdisciplinarios correspondientes, en el ámbito de la Capital Federal. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley (Orden del Día N° 1.020). ¹

En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. – Es para solicitar autorización para abstenerme de votar.

Sr. Presidente. – En consideración la solicitud formulada por el señor senador Rodríguez Saá.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Solicito autorización para abstenerme de votar.

Sr. Presidente. – En consideración la solicitud formulada por la señora senadora Negre de Alonso.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49 votos afirmativos, ninguno negativo. Es por unanimidad.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 12. ¹

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. ² Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

23

**P.E.-852/04: PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN
DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER**

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los asuntos sobre tablas acordados.

En primer término, corresponde la consideración del proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999 (P.E.-852/04). ³

Se va a votar si se habilita el tratamiento sobre tablas.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

En consideración en general.

Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: antes de ingresar en el fondo del asunto, quisiera dejar sentado un tema que está claramente resuelto por la Constitución. Pero como hubo algunos comentarios previos respecto de la cantidad de votos que necesita este proyecto de ley, quisiera referirme al asunto.

El artículo 1° del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo dice: “Artículo 1°: Apruéba-

¹ Ver el Apéndice.

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

se el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.

Se trata de la aprobación de un tratado. El inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional establece en su primer párrafo que compete a este Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

O sea, no exige ningún tipo de mayoría especial. La aprobación de los tratados, como siempre lo hicimos en este Congreso, requiere la mayoría propia de cualquier ley.

El tercer párrafo de este inciso 22 dice que los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Esto significa que si a un tratado de derechos humanos, después de ser aprobado por el Congreso, se le quiere otorgar jerarquía constitucional, se debe proponer un nuevo proyecto a tal fin, para lo cual son necesarios los dos tercios del total de los miembros de cada Cámara.

Así procedió este Congreso cuanto trató la aprobación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. En su momento, por la ley 24.584 le dimos aprobación a dicha convención. Si leemos la versión taquigráfica correspondiente a las sesiones del 14 y 15 de junio de 1995, en las que se trató la aprobación de esa convención, veremos que se votó por mayoría simple.

Posteriormente a la sanción de la ley de aprobación de ese tratado, por una nueva ley, considerada varios años después, la ley 25.778, se le dio jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra. El artículo 1º de ese proyecto de ley decía que se otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra. Si leemos la versión taquigráfica correspondiente a la sesión de la Cámara de Diputados del 12 de agosto de 2003 y la de la sesión del 20 de agosto del mismo año del Senado, comprobaremos que se apro-

bó por los dos tercios que se le diera jerarquía constitucional. Esto es por el mandato expreso del artículo 22, que establece que los tratados o convenciones se aprueban por mayoría, como cualquier tratado o convención.

Para otorgar jerarquía constitucional, luego de aprobados, sí se requieren dos tercios de los votos. En el mismo sentido se manifiesta toda la doctrina; sólo puedo mencionar que tengo acá textos de derecho constitucional de Gelly y Sagüés, que son absolutamente contestes en la materia.

Dicho esto, y para que quede claramente asentado para la versión taquigráfica, hoy estamos aprobando un tratado internacional. No estamos otorgando jerarquía constitucional ni podríamos estar dándola hoy, porque la Constitución exige dos pasos: primero, aprobar, y luego de que es aprobado por el Congreso, si hay una iniciativa para otorgarle jerarquía constitucional, allí se da el segundo paso parlamentario, donde se le otorga jerarquía constitucional.

Siempre lo hicimos en este sentido y quiero dejar claro que hoy estamos aprobando un tratado, lo cual requiere la mayoría de los votos, como cualquier ley.

Dejo sentado esto, y en función de esto, sí, que tome la palabra la miembro informante.

Sr. Presidente. – Queda acordada la mayoría simple para la aprobación del proyecto.

Queda abierto el debate. Tiene la palabra la senadora Perceval, por Mendoza.

Sra. Perceval. – Señor presidente: por fin, hoy, en el recinto, estamos tratando el sistema internacional de protección y exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres, a través de la decisión y afirmación del Protocolo Facultativo de la Convención...

Sr. Presidente. – Senadora Perceval: el senador Pichetto le solicita una interrupción.

Sra. Perceval. – ...para la Eliminación contra toda Forma de Discriminación contra la Mujer. Ahora que terminé la enunciación del título, con todo gusto concedo la interrupción.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: he pedido la interrupción a los fines de elaborar la lista de los senadores y senadoras que van a hablar y de fijar un criterio de tiempo, para que no se dilate

en demasía el tratamiento de este tema tan importante. Propongo un plazo de veinte minutos para los miembros informantes y un máximo de diez para cada uno de los senadores o senadoras que van a hablar. Por nuestro bloque, ya acerqué los nombres de los cuatro senadores que están anotados; no habrá otros oradores.

Vamos a incorporar también las inserciones. Así que nos gustaría saber cuántos son los senadores que van a hablar. Hacemos la lista, fijamos una hora estimativa de votación y cerramos la lista de oradores.

Sr. Presidente. – Solicito a los señores senadores que indiquen quiénes van a hablar, así confeccionamos la lista y luego la cerramos.

Tiene la palabra el senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señor presidente: por nuestro bloque va a ser miembro informante la senadora Isidori y luego van a hablar la senadora Mastandrea y el senador Morales.

Sr. Presidente. – El senador Gómez Diez también se anota y lo mismo el senador Giustiniani. Va a insertar el senador Menem; la senadora Negre de Alonso va a hablar...

En consideración todas las inserciones solicitadas. Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. ¹

Por Secretaría se va a leer la lista de oradores, votamos el cierre y así tendremos definida la hora estimada de votación.

Sra. Giri. – Señor presidente: solicito autorización para insertar.

Sr. Pichetto. – Ya fue votada.

Sr. Presidente. – Queda incluida.

Están anotados para hacer uso de la palabra los siguientes senadores y senadoras: Perceval, Isidori, Negre de Alonso, Escudero, Jenefes, Mastandrea, Fellner, Rossi, Giustiniani, Ibarra, Morales y Perceval, nuevamente, que cerraría el debate.

Tiene la palabra el senador Rossi.

Sr. Rossi. – Yo había pedido autorización para insertar.

Sr. Pichetto. – Ya fue votada.

Señor presidente: hagamos la lista y fijemos una hora estimativa.

Sr. Presidente. – Calculemos aproximadamente dos horas y media; por lo tanto, la hora estimada de votación sería las 20 y 30.

En consideración el cierre de la lista. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Tiene la palabra la señora miembro informante, senadora Perceval, por la provincia de Mendoza.

Sra. Perceval. – Señor presidente: el inicio de la exposición es con una metáfora de lo que hemos vivimos con el protocolo: cuando empezábamos a hablar, volvíamos para atrás; pero ahora vamos hacia adelante. Nos abocamos al tratamiento del Protocolo Facultativo del CEDAW.

Como todos los señores senadores y senadoras han leído suficiente y largamente esta iniciativa –porque desde febrero de 2000, cuando Argentina firma el protocolo, estamos debatiendo sobre la necesidad, legitimidad y exigibilidad de contar con este instrumento del sistema internacional de derechos humanos para las mujeres–, no me voy a detener, en mi carácter de miembro informante, en los 6 capítulos de la convención ni en sus 30 artículos. ¿Por qué? Porque estoy segura de que aun quienes lo objetan lo han leído minuciosa y detalladamente. Tampoco voy a referirme a los 21 artículos del Protocolo Facultativo.

Pero sí quiero señalar el porqué de la necesidad de un protocolo específico que acompaña la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Porque parece –y miro a queridas amigas que desde el inicio, cuando llegamos al Senado, presentamos proyectos en el sentido de la ratificación del protocolo– que también este tema sobre los derechos humanos, con formas sutiles o explícitas, era postergado o negado, entendiendo que debíamos interpretarlo por analogía.

“¿Para qué un Protocolo Facultativo de la CEDAW, si ahí tienen, por ejemplo, el protocolo que podemos utilizar en el tema de torturas y tratos aberrantes, que aprobamos hace poco; si tienen el de discriminación racial o también

¹ Ver el Apéndice.

tienen la Convención sobre Derechos Humanos y la Corte? ¿Para qué ratificar un protocolo que hace efectiva, concreta y real la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres reconocidos en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer?” Miren: porque también en esto, las mujeres y los varones que entendemos que la democracia es plena cuando la igualdad existe y la equidad tiene oportunidad, quienes lo entendemos así consideramos que no puede ser que justo este tratado sobre derechos humanos sea el que no tiene aprobado su protocolo facultativo. Entonces, nuevamente la retórica de la igualdad.

En la convención estaba todo bien: estaba bien que dijéramos igual paga por igual trabajo; acceso a los servicios de salud; no precarización del empleo ni trabajo informal, sobre todo en el área doméstica; no condiciones de pobreza y exclusión de las mujeres rurales; no discriminación a las mujeres indígenas; no obstáculos para la igualdad de oportunidades educativas; no muros —que en algún momento fueron infranqueables— para la participación política y ciudadana en los espacios de decisión.

¡Parece que con el relato entusiasmado y hasta enardecido de lo retórico bastaba! Sin apelar a la visión conspirativa cabe preguntar: ¿tantos años colgadas de la retórica y tantos años en los que no se reconocía que, como los otros instrumentos sobre derechos humanos, también la Convención sobre los Derechos Humanos de las Mujeres necesita un protocolo facultativo? En este sentido, insisto: no incluye nuevos temas, no otorga nuevos derechos, no le abre la ventana a los fantasmas ni a los monstruos. Es el instrumento de exigibilidad y garantía de los derechos reconocidos en la convención, que aprobáramos como argentinos y argentinas diecinueve meses después de haber recuperado la democracia.

Claro, estos mecanismos internacionales existentes no son simplemente retóricos. Porque cuando constituyen la expresión de una voluntad valiosa que expresa una voluntad internacional —y desde los Estados parte del sistema internacional de las Naciones Unidas— acerca de que queremos sociedades de plena igualdad, es bueno expresar esa voluntad. Pero también es bueno decir que son insuficientes e

inadecuadas las convenciones si no se crean, aprueban y ratifican los instrumentos que permiten procedimientos específicos que contemplen quejas e investigaciones y que permiten que el sistema internacional coadyuve y coopere con los Estados cuando no hay un respeto al pleno ejercicio de los derechos, en este caso, de las mujeres.

Es cierto que la ratificación del Protocolo Facultativo promueve una implementación más efectiva de la convención, porque es una aplicación práctica de la misma. Además, ayuda a crear una conciencia pública sobre las garantías internacionales de los derechos humanos de las mujeres. Esto no es para unas pocas, no es para minorías de mujeres activistas iluminadas. Es para todas las mujeres. También es para aquellas que, desde distintos ámbitos de organizaciones feministas o de movimientos de mujeres, venimos desde hace décadas trabajando por estos instrumentos de exigibilidad y garantías de derechos de las mujeres.

Indudablemente, lo que estamos haciendo hoy —debatiendo el Protocolo Facultativo— es contribuir a la integración de los derechos humanos de las mujeres en los programas de derechos humanos. Es decir, no estamos reclamando sino construyendo un derecho que tenemos, que es el de la igualdad.

Como decía al inicio, cómo lo explicamos si no es a través de la indiferencia —y miro a las senadoras con quienes venimos planteando este tema hace tiempo—, el cinismo, la hipocresía o, simplemente, la desvalorización de esta agenda. ¿Cómo explicamos que en el Pacto sobre Derechos Políticos y Civiles, que establece un procedimiento de denuncia al Comité de Derechos Humanos, no hay problema? ¿Cómo explicamos que en la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial, que permite denuncias al comité, no hay problema? ¿Cómo explicamos que en la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que permite denuncias al comité, no hay problema?

¿Qué problema hay en generar los instrumentos que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres? Sería inexplicable, cuando hemos dado rango constitucional a la convención, que sigamos postergando y negando el instrumento que la hace efectiva

en la medida en que permite hacer efectivo el ejercicio de los derechos en caso que sean negados.

Esto también tuvo mucho debate internacional. Pero cuando se visibilizó que nuevamente en el sistema internacional se estaba postergando equiparar la situación de los derechos humanos de las mujeres, cuando en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 fue justamente el consenso pleno y explícito por todos los países que integran el sistema de Naciones Unidas, en el cual estamos, dijeron que faltaba, justamente, el procedimiento facultativo para la presentación de denuncias, quejas y pedido de investigaciones con arreglo a la convención.

No se trabajó improvisadamente. No es este el resultado de una marcha de alocadas feministas que anduvimos por las calles pidiendo hacer un protocolo o escribiéndolo entre cuatro. ¡No fue así! Desde 1994 se hizo un grupo sobre derecho internacional de derechos humanos. En el Centro de Derechos Humanos de Maastricht se elaboraron aquellos primeros consensos, criterios e ideas que tenían que animar la redacción de un borrador de protocolo. Estábamos cerca de la Conferencia Mundial de la Mujer de 1995, en Beijing. ¡Tampoco ahí, apresuradamente, se presenta! Transcurrió otro período de cabildeo, de búsqueda de consensos, de precisión terminológica en un protocolo que establece procedimientos. E insisto en esto: no incorpora nuevos derechos. ¡No habla de otra cosa que no sea de lo que habla la convención!

En 1999, se reúne la Comisión de la Condición de la Mujer, un grupo destinado a redactar el texto del Protocolo Facultativo. Entonces, una se pregunta: ¿herramientas para qué derechos?, ¿herramientas para qué igualdad? Simplemente, para ejercer los derechos civiles y políticos, para gozar de plena igualdad en la familia, para que las niñas tengan iguales derechos que los niños a la educación y al cuidado de la salud, para que las mujeres —niñas, jóvenes, adultas, ancianas— gocen de protección social y judicial en la violencia contra la mujer.

Sin embargo, seguimos con cifras que nos escandalizan cuando las vemos en letra de molde. Según estudios confiables —también sabemos que son subregistros—, al menos 7 de cada 10 mujeres en la región de América Latina han sufrido alguna vez algún tipo de violencia.

¿Qué cosas pedimos que se establezcan como derechos a la igualdad y a la equidad? Que las mujeres —todas— tienen igual derecho que los varones al acceso a todos los sistemas de estudio.

Tal vez, a las argentinas nos parezca un pedido extravagante, porque hace mucho tiempo que conquistamos esos derechos; pero resulta que las mujeres nunca nos pensamos como un ghetto o como un sector. Cuando pensamos, cuando militamos los derechos de las mujeres, basta que una mujer sea víctima de la violencia para mantener la causa intacta y el compromiso indeclinable. Basta que un país impida que las mujeres ingresen a estudios superiores para que nosotros creemos solidaridad, conciencia, sensibilidad e información, para que la desigualdad no sea el rostro de este mundo globalizado.

Tenemos el mismo derecho a gozar del cuidado de la salud. En efecto, tenemos derecho a recibir información sobre medidas de protección y prevención de las enfermedades sexualmente transmisibles y del sida y a la atención y al cuidado de la salud reproductiva. ¡Votamos esa ley! ¡Votamos la ley de educación sexual!

¡Miren: no estamos haciendo entrar ni fantasmas ni monstruos por la ventana! ¡Estamos poniendo nuestro derecho interno en línea con el derecho internacional, dándole a esta convención su rango constitucional! Estamos brindando un instrumento para todos. Es un rango que tienen todas las convenciones de derechos humanos. ¡Y no hubo tanto ruido, ni hubo tanto miedo, ni hubo tantas mentiras circulando por ahí!

Todas las mujeres, sin distinción de edad, tienen esta posibilidad y esta necesidad. Si se quiere expresar en términos éticos: todas merecen gozar de iguales derechos que los varones en el trabajo. ¡Es así de sencillito! Las mujeres lo entienden bien, ¡no las iluminadas, las de los barrios! ¡Igual paga por igual trabajo! Eso es lo que dice esta convención. ¡Tenemos derecho a no ser sometidas a ninguna prueba de no embarazo como condición para una contratación laboral! Esto lo entienden muy bien las mujeres que son contratadas con contratos basura, como también aquellas que por estar embarazadas son despedidas.

Las mujeres tienen iguales derechos a la propiedad, a la herencia de la tierra, a la vivienda,

a la alimentación, al crédito, al deporte y a las actividades culturales. En síntesis, tenemos derecho a construir y gozar de una ciudadanía plena.

La mejor garantía de que la convención efectivamente se aplica es que las mujeres –también las argentinas– no necesitan utilizar los procedimientos que este protocolo establece.

Justamente, cuando existe negación de justicia, de derechos, cuando el Estado se vuelve un ámbito de privilegios y no como lo hemos definido y lo construimos, en clave de derechos humanos, es que debemos recurrir a esta norma. Algunos y algunas sostienen que la situación de las instituciones en nuestro país es terrible. Sin embargo, yo les digo que no; que estamos creando Estado con las herramientas, los instrumentos y las políticas que hacen que el Estado no sea el lugar de unos pocos privilegiados, sino un Estado social de derechos para todas y todos, aunque también de responsabilidades. *(Aplausos.)*

Existen 82 países que han ratificado el protocolo. No vamos a aceptar que se afirme que los países que han aceptado y ratificado el protocolo no son serios. En la Argentina también se decía, hace tiempo atrás, que existían provincias y municipios inviables, razón por la cual había que cerrarles la puerta y chau. Por favor, que me digan qué escriben en ese documento que nos hicieron llegar. ¿Cuáles son los países serios?

Me he tomado el trabajo de ver si el criterio “serio” resultaba de una medición del ingreso per cápita o si se vinculaba con cuánta basura de alimentos tiraban ciertos países; en América Latina encontramos cientos de mujeres con sus niños a cuestas en los basurales buscando para comer, siendo estos alimentos de menor calidad y valor nutricional.

Entonces, me preguntaba cuáles eran los países los serios. Y dije: los desarrollados. Tomé como criterio el ingreso. Pues bien, parece que existe otro criterio. De lo contrario, no se cuáles son los países serios. No voy a aburrir a este cuerpo, pero el alfabeto comienza con la “a” y, en este caso, termina con la “v” corta, con Venezuela. O empieza por ahí.

Voy a contar los países: Angorra, serio; Austria, serio; Bélgica, serio; Bolivia, serio; Brasil, serio; Burkina Faso, serio; Canadá, se-

rio, Colombia..., Costa Rica, serio –constituye un ejemplo de democratización–; Dinamarca, serio; República Dominicana, serio; Francia, serio; Alemania, serio; Irlanda, serio; Italia, serio. Claro, a lo mejor, Kazajstán no era serio para quienes escribieron ese correo electrónico.

En fin, no conozco el criterio, pero así puedo llevar a esta Cámara desde la “a” hasta la “v” corta. Por ejemplo, España y Perú también son serios; con lo cual, existen 82 países que han ratificado el protocolo.

En el Mercosur, sólo falta nuestro país. Los restantes países del Mercosur han ratificado el protocolo, no como novedad de último momento.

Esto se vincula con que cuando hablamos de integración real, muchas veces, decimos que no se trata sólo de integrar la competitividad del mercado, sino también las culturas y los derechos humanos, sus garantías, su exigibilidad, su universalidad, su integralidad y su indivisibilidad.

Indudablemente, los hombres y las mujeres que estamos aquí, así como las amigas mujeres que se encuentran en el Salón Azul de este Congreso hemos leído de adelante para atrás el texto, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, para ver dónde estaban los problemas que impedían que ratificáramos un protocolo que permite dos procedimientos: queja e investigación, como todos los otros instrumentos de derechos humanos.

Por eso no quiero cansarlas con la descripción del protocolo. Pero sí quiero terminar. Me reservo, para cerrar, algunas cuestiones que seguramente surgirán en el debate.

Los países serios tal vez sean los que tienen coherencia en sus políticas de Estado; los derechos humanos no son ofertas de ocasión sino un modo de construir un Estado, una forma de vida y una democracia real. Porque es inexplicable lo que nos pasa entre que ingresa la ratificación, que la sacan, que vuelve a ingresar, que la dejan dormir. Eso no es de un país serio, tampoco que se hable del nacionalismo. Reitero; esto no es de un país serio. Supuestamente ahí plantamos posición del Estado.

El 11 de marzo de 1999, la mayoría de las que hemos quedado sentadas acá no éramos senadoras, íbamos por ahí perdiendo tiempo

como docentes, militantes feministas, en los movimientos de mujeres, no sé, trabajando.

En 1999, nosotras trabajábamos con las mismas convicciones con las que hoy estamos sentadas en las bancas. Y debo mencionar aquí a Gloria Valerín. Ustedes me dirán ¿quién es Gloria Valerín? Para los que no la recuerden era la ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica —después veremos si es un país serio según la lista del e-mail—, quien presentó una declaración interpretativa del Protocolo Facultativo de la CEDAW. ¿Qué dijo? Que no hablaba por ella, que lo hacía por Costa Rica pero que, además, hablaba en nombre de las delegaciones de la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela, las que formulaban la siguiente declaración: teniendo como marco los principios generales del derecho internacional y los estándares de aplicación de los instrumentos regionales de protección de derechos humanos, nuestras delegaciones desean destacar la importancia de la incorporación del procedimiento de investigación en el Protocolo Facultativo, pues su existencia dentro del sistema interamericano viene demostrando que constituye una forma de colaborar con los Estados para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y queremos, finalmente, expresar que los esfuerzos realizados durante los últimos años para aprobar el Protocolo Facultativo expresan el compromiso de nuestros Estados para mejorar la condición de las mujeres y para eliminar todas las formas de discriminación. Es decir que es la Argentina quien en 1999 reconoce la competencia del comité para entender en los procedimientos de queja e investigación, y resalta la importancia de la incorporación de estos procedimientos.

Quiero terminar como empecé; más de una vez hemos sentido que cuando se habla de infancia, de derechos de las mujeres, de las jóvenes y los jóvenes aparecen las frases hechas, los *slogans* más enternecedores, los sentimientos más sublimes y las retóricas más vacías. ¿Por qué digo esto? Repasando con las amigas una se pregunta: ¿cuándo fue que la Argentina aprobó la convención? Hasta en la dictadura, cuando regía en la Argentina el terrorismo de Estado, como los derechos humanos de las mujeres son palabras bonitas, de ocasión, podían ser consi-

derados. Si, total, signar un instrumento relativo a los derechos de las mujeres resulta inocuo.

Hubo que esperar la recuperación democrática para avanzar, poco a poco, en la ratificación y empezar a debatir el Protocolo Facultativo, el envío del mensaje del Poder Ejecutivo pero, también, la enorme tenacidad de las senadoras y senadores —énfasis senadoras— que hemos presentado, desde el primer día que llegamos al Senado, la ratificación de este protocolo, no para quedar bien con Naciones Unidas sino para que nada impida que las mujeres argentinas tengamos derecho a una ciudadanía plena, digna, libre, es decir, a que los derechos humanos sean, también, de las humanas, de las mujeres. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Río Negro.

Sra. Isidori. — Ha sido sumamente placentero escuchar a la senadora Perceval, por la claridad y la pasión que ha puesto en este tema, muy esperado por muchas de nosotras que —como bien decía ella— somos autoras de varios proyectos presentados cuando recién llegamos a este Senado.

Rescato que la hemos escuchado con mucha atención, lamentablemente una mayoría de mujeres. Por eso, quiero agradecer muy especialmente a los senadores que hoy están en sus bancas y escuchan este debate... (*Aplausos.*) ...que podría haber tenido el marco y la presencia de las mujeres, de las ciudadanas comunes, que hoy están en el Salón Azul. A ellas nuestro reconocimiento por “hacernos el aguante” en esta cuestión tan cara a aquellas mujeres que venimos, desde hace muchos años, luchando por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres.

Creo oportuno, a efectos de no superponer mi exposición con la de la senadora Perceval, hacer un poco de historia del camino recorrido por nosotras, las mujeres, en esa conquista por los derechos que ha sido tan dura, tan obstaculizada.

Quiero comenzar por rescatar lo que yo entiendo fue un hecho medular en la lucha de las mujeres en la República Argentina. Me refiero a la sanción de la ley 13.010 que, de la mano de Eva Duarte de Perón, otorgó el derecho al sufragio a las mujeres argentinas. Así irrumpimos

con mucha fuerza en la vida política de nuestro país y nos organizamos rápidamente. Podría mencionar muchas de esas organizaciones, donde el socialismo, por ejemplo, jugó un papel preponderante en la reivindicación permanente de los derechos de las mujeres.

Desde 1947 en adelante hubo mucha actividad y mucha participación, pero llegó el momento del oscurantismo en nuestro país, del silencio, de la persecución, del secuestro, de la inexistencia de los derechos humanos. Ahí hubo un “parate” y un retroceso que luego nos costó mucho remontar.

Llega 1983 de la mano del presidente Raúl Alfonsín. Recuperamos la democracia pero, fundamentalmente, recuperamos el estadio de no tener miedo, tarea que no nos fue nada fácil, tal vez a las mujeres menos que a los hombres. Y en esa etapa histórica hay dos leyes que marcan clara y meridianamente el avance de las mujeres en la Argentina.

Me refiero a la ley que establece la patria potestad compartida y a la del divorcio, sancionada también en el período 1983-1989. Así, lenta y pacientemente, pero con mucha persistencia y convicción, fuimos recuperando esos derechos.

En 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, se reconoce la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer y se la incorpora al texto constitucional. Y nuestro país fue Estado parte de la mayoría de los tratados, convenciones y conferencias que avanzaron en el reconocimiento de los derechos humanos.

Por eso pienso que hoy, en realidad, no se debate el protocolo facultativo. Específicamente se alude a derechos humanos. Y absolutamente nadie puede arrogarse la posibilidad de menoscabar los derechos de todos si se pretende implementar o sostener una sociedad libre y solidaria. Y menos aún se puede pensar que un Estado es democrático si no garantiza, a través de su marco jurídico, los derechos humanos de las mujeres.

Cuando llegó este histórico momento de tratar en el Senado de la Nación el presente protocolo, me preguntaba por qué debíamos aprobarlo. ¿Es cierto que obliga a nuestro país a cumplir con las recomendaciones del comité, que es el

instrumento de aplicación de la Convención? ¿Menoscaba la soberanía argentina? Porque este fue un argumento que permanentemente se ha utilizado para oponerse a la ratificación del protocolo. ¿Es cierto que abre las puertas al aborto?, algo reiteradamente escuchado e instalado en todos los medios.

Señor presidente y estimados pares: creo que se siguen generando argumentaciones de naturaleza política, religiosa y cultural a efectos de confundir, obstaculizar, detener y mantener el *statu quo* en el reconocimiento específico a los derechos de las mujeres. Y creo que ha llegado el momento de hablar claro porque no puedo pensar que estas argumentaciones estén basadas exclusivamente en el desconocimiento. Debo pensar que hay una intencionalidad.

Entonces, hay que trabajar para arrancar de la sociedad la venda que, en su conjunto, no le permite dejar de lado una ideología funcional a los intereses de aquellos que se sienten beneficiados por el mantenimiento del avasallamiento y la dependencia de la mujer. Esa desigualdad que provoca muerte, lástima y menosprecio.

Solamente se podrá llegar a construir entre todos una sociedad libre, igualitaria y equitativa si se cumple la legislación en vigencia y si conocemos las normativas que tanto trabajo nos han costado construir para poder transitar el camino que pretendemos, no sólo para nosotros sino para la sociedad en su conjunto.

Por eso quiero responder que el Estado parte, que es la Argentina, no está obligado en este protocolo a aceptar todas las recomendaciones que puedan surgir del comité. El artículo 23 es clarísimo, y aún más lo es el 19: “Cualquier Estado parte puede renunciar al protocolo en cualquier momento”.

Por otro lado, no es cierto que abre la puerta al aborto. Tenemos que terminar con una ceguera que seguramente ha hecho mucho mal a varios sectores de la población. La moral, la verdadera moral, es el arte de vivir con dignidad y que cada una de las mujeres pueda ejercer responsablemente su libertad y disponer y resolver sobre su reproducción. Debe poder ejercer, con total y absoluta garantía, los derechos que la ley le otorga, y de eso se trata. Por ello, creo que hoy vamos a coincidir—por lo menos, la mayoría—en que estamos saldando una deuda ética, jurídica y social. Porque si hoy no votamos favorable-

mente este protocolo debemos tener en cuenta que no solamente estaremos debilitando y limitando los derechos de las mujeres, sino los de la sociedad en su conjunto.

Era mi intención extenderme un poco más pero voy a ir terminando, tratando de ser breve, porque se han anotado muchos oradores.

Me voy a permitir recordar a quienes están preocupados por la educación y por el respeto a la calidad humana y a la libertad que cuando educamos a un niño en libertad estamos construyendo un hombre libre, pero cuando educamos a una niña estamos construyendo educación y libertad para la familia y para toda la sociedad. Y para bien o para mal a nosotras, las mujeres, nos toca el mayor peso en la educación de nuestros hijos e hijas. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora por San Luis, Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en verdad, empecé a escuchar a la miembro informante y después, a lo largo de sus palabras, me di cuenta que quiso aclarar lo que dijo al principio pero, en realidad, no lo aclaró. Al escucharla tuve la impresión de que no estoy viviendo en la Argentina que ella intentaba describir, porque cuando decía que el protocolo va a garantizar los derechos de las mujeres en la Argentina y los derechos humanos, que va a terminar con el avasallamiento de las mujeres y que vamos a poder vivir en libertad, pensaba si estaba soñando o si esta no es la Argentina real.

La senadora miembro informante explicó sobre el iter histórico que significó la aprobación de esta convención, el iter histórico de cómo se aprobó el tratado después en la Argentina.

Lo que hoy se somete a debate, aunque no tiene dictamen de comisión, es la aprobación del protocolo. En definitiva, ¿qué es el Protocolo del CEDAW? Todos hablamos del Protocolo del CEDAW como si todos supieran lo que es. Ese protocolo no es otra cosa que dar más facultades al comité que contempla la propia convención a la que la República Argentina en su momento adhirió y que el Congreso votó.

¿Que significa dar facultades al comité? Cuando escuchaba decir a la senadora Isidori que vamos a terminar con el avasallamiento, pensaba que es como decir que el gobierno no

garantiza los derechos humanos de las mujeres. Esto según lo que he escuchado hasta ahora.

El comité es un organismo que está conformado por personas que proponen los Estados pero que actúan a título personal –lo dice el propio protocolo– y tiene dos sistemas de actuación. Uno es a pedido de parte. Cuando hay una denuncia se le corre vista al Estado denunciado; ese Estado tiene seis meses para contestar. A ese Estado se le hacen recomendaciones o consideraciones que deben ser especialmente atendidas por él. Después se le pide un informe para ver cuál es la evolución de las medidas que se han sugerido, etcétera.

Pero también el protocolo contempla lo que el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, en un informe de agosto de 2003, ha calificado como la actuación de oficio del comité. Esta actuación de oficio está contemplada en el artículo 5°. Dice que el comité puede, ante determinadas cuestiones, violaciones o desconocimientos sistemáticos, tomar determinadas medidas inaudita parte.

Eso mismo lo explica la Cancillería en un informe de 2001 y lo vuelve a explicar en agosto de 2003 cuando hace un análisis de esta situación. Dice que el comité puede notificarle al Estado para que tome medidas inmediatas respecto de estas sugerencias o incumplimientos.

Me puse a releer esto y la verdad es que hoy me acordaba de la senadora Escudero y del senador Fernández. Me preguntaba qué pasa si el comité, después del debate que tuvimos ayer respecto de los deudores hipotecarios, hace cumplir la norma del artículo 13, inciso b) –creo– que dice que las mujeres tienen derecho a que se les otorgue crédito en las instituciones financieras, préstamos, hipotecas y otras formas de crédito financiero porque, en caso contrario, existiría discriminación. Me acordaba de la senadora Escudero que planteó ayer la incorporación a este sistema de crédito para los inquilinos con respecto a los deudores.

¿Saben qué otra cosa? El seguro social, sobre el que tanto ha hablado de la CTA. Entonces, me acordaba del diputado Lozano cuando decía que la Argentina tenía que imponer un seguro social obligatorio. Decía que ahora podrá pedir al comité que arbitre las medidas para que la Argentina lo haga.

Pero esto no es lo importante. En realidad, lo importante y la preocupación de quienes nos ocupamos de este tema son las posturas que el comité ha tenido en los últimos tiempos. Porque está la convención, y es verdad que en los tratados la Argentina ha aceptado la integración de las comisiones, como lo dijo la senadora Perceval. ¿Pero qué es lo que está pasando con el comité que integra la convención?, me refiero al Comité del Protocolo, y que hace cumplir la convención. Ocurre que, a pesar de que la senadora Isidori lo haya negado, está fijando posición en el sentido de que aquellos países que en su legislación no tienen contemplado al aborto estarían efectuando una discriminación hacia la mujer y, en consecuencia, recomienda a los Estados partes que se deben tomar esas medidas. Eso es lo que nos preocupa fundamentalmente.

Por supuesto que recomienda otras cosas más. Miren: últimamente recomendó a Bielorrusia, a Armenia y a Irlanda que sacaran el Día de la Madre, porque se asocia a la mujer con la maternidad y de esta forma favorecen los estereotipos negativos.

Pero las últimas recomendaciones del comité han sido, por ejemplo, a China, a Alemania y a México, para que legalicen la prostitución, porque este oficio es un trabajo más.

Además, por ejemplo, ha recomendado también a Turquía que deje sin efecto la legislación que exige el consentimiento del cónyuge para realizar el aborto, porque consideraba que eso violaba la convención.

Y es mucho más lo que está recomendando el comité. Pero antes de leer las recomendaciones efectuadas a otros países, voy a leer una documentación que me llegó y que me pareció muy interesante.

La señora Lubertino, que hoy está en el INADI, y se encuentra aquí presente en apoyo del protocolo, el 10 de junio de 2002, en una conferencia que dio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, al presentar el libro *Cuerpo y derecho*, publicado en Colombia por el Centro de Derechos Reproductivos de New York y de la Universidad de Los Andes, dijo: “Tenemos que presionar para que se ratifique cuanto antes el Protocolo Facultativo de la Convención de la Mujer, porque esto los

obligará a la legalización del aborto por imposición internacional”.

¿Qué más ha dicho el comité? Esto es lo que nos preocupa a los que defendemos la vida desde la concepción en el seno materno, pero además a los que creemos que mientras no se modifique la Constitución el aborto en la Argentina no podrá ser implantado.

A Libia le sugirió adaptar el Corán y permitir el aborto; a Chile, legalizar el aborto terapéutico; a China, legalizar la prostitución; a Bielorrusia –lo dije recién–, no establecer el Día de la Madre, porque el comité considera la maternidad como un estereotipo negativo para las mujeres. La verdad es que para mí haber sido madre es uno de los logros más importantes de mi vida; el más importante.

Asimismo, en Turquía –reitero– recomendó dejar de lado el consentimiento del cónyuge; en Italia, recomendó encarecidamente al gobierno que adoptara medidas para garantizar a la mujer –en particular, a la de la región meridional– el ejercicio de sus derechos a la procreación, entre otras cosas garantizándole el acceso al aborto en condiciones de seguridad en los hospitales; en Croacia, recomienda enérgicamente al gobierno que garantice que la mujer ejerza sus derechos a la reproducción y que tenga acceso a los servicios de aborto en los hospitales públicos.

Para el comité es motivo de preocupación la información de que algunos hospitales se niegan a realizar abortos debido a las objeciones de conciencia presentadas por ciertos médicos. Es decir que es motivo de preocupación del comité que los médicos se nieguen a realizar los abortos por objeciones de conciencia.

Tengo un montón de casos. Estoy tratando de sintetizar todas las recomendaciones del comité. Y esto es prueba palmaria; no se trata de agoreros o de fantasmas; es una situación fáctica, real, objetiva, documentada. La cuestión es la posición en que cada uno se coloca frente a esta situación.

En primer lugar, creo que en la Argentina tenemos garantizados los derechos humanos de las mujeres. Yo no puedo dejar pasar las afirmaciones que se han hecho recién en el sentido de que los tenemos a partir de ahora. Cada día es perfectible y mejorable. Pero, bueno... Si no

tenemos a la señora Lubertino, que es la que protege en el tema de la discriminación...

Ahora bien: ¿qué es lo que podemos hacer frente a esto? Tenemos tres posibilidades: la primera, aprobarlo *in totum*. Como sabemos —creo que ya se mencionó acá; si no lo digo yo— y hemos debatido en las comisiones, no hay posibilidades de reservas en este tratado: las tiene expresamente prohibidas *in totum*. La segunda posibilidad es la que plantearon en su momento el senador Jenefes, el senador Eduardo Menem y otros senadores más que no recuerdo, en lo que fue un dictamen en mayoría, en el sentido de hacer uso del derecho del artículo 10 del protocolo, que permite que el comité no ingrese a los efectos del temario que prevén los artículos 8º y 9º. Es decir que si bien no se pueden hacer reservas, sí es posible hacer uso de la declaración interpretativa del artículo 10. La tercera posibilidad es rechazarlo *in totum*.

Entonces, yo me pregunto por qué no nos planteamos hacer uso del derecho que nos confiere el artículo 10 a aquellos que firmaron el tratado y aprobar el protocolo con las dos recomendaciones que hicieron dos veces seguidas los senadores que he nombrado y otros más.

Lo que he dicho, en el sentido de que se está aconsejando legislar sobre el aborto y que no hacerlo se considera discriminación y violación de la convención, fue en base a documentos objetivos.

En su oportunidad, la senadora Perceval también firmó un dictamen con una declaración interpretativa. El 30 de abril de 2002 este Senado recibió una nota que solicitaba el retiro del protocolo. La nota decía: “Por otra parte, si bien el artículo 10 del protocolo aludido en el presente establece la posibilidad de que los Estados parte puedan no reconocer la competencia del referido comité respecto del emprendimiento de investigaciones, ello no constituye suficiente resguardo frente a interpretaciones de la convención y recomendaciones orientadas a la promoción de la despenalización del aborto.

”La situación planteada iría en desmedro del sagrado e irrenunciable compromiso de la República Argentina en lo atinente a la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción, tal como se encuentra establecido en las normas del artículo 4º, apartado 1º, del Pacto de San José de Costa Rica y en la Convención

de los Derechos del Niño, ambos con jerarquía constitucional de conformidad con el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

”Lo expuesto determina que sea altamente desaconsejable que se proceda a la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer solicitada en el mensaje 631/01 (porque, en realidad, lo mandó el ex presidente De la Rúa). Lo firman el presidente Eduardo Duhalde y el entonces jefe de Gabinete de Ministros —hoy senador nacional— Jorge Capitanich.” O sea, no es el pensamiento religioso de algunos, como se dijo aquí.

La protección de la vida desde la concepción en el seno materno no es una posición religiosa sino constitucional. Es una posición del convencional constituyente de 1994. Es una posición del pueblo argentino que votó a los convencionales constituyentes de 1994. Eso es orden público interno, con jerarquía constitucional, en la República Argentina. Por eso es la oposición al protocolo sin la declaración interpretativa del comité.

Aclaro que ya me he pronunciado en contra en tres oportunidades. La última vez dije que si se acepta la propuesta del senador Jenefes —creo que la senadora Escudero también lo votó, no estoy segura—, retiro mi posición. No es una preocupación religiosa. La preocupación se debe a que, como bien dijo la titular del INADI en la Universidad de Buenos Aires, detrás de la aprobación de este proyecto viene la recomendación internacional para que la Argentina incorpore al aborto como forma de planificación familiar. Porque sabemos que en la jerga de las organizaciones unidas “planificación familiar” significa contracepción, salud reproductiva y aborto.

Lo mismo que estoy diciendo, sobre la posibilidad de la declaración, lo han dicho en dos oportunidades los dictámenes del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. En 2001 llegó el primer dictamen y después llegó el otro en agosto de 2003, donde dice que Cuba, Argelia y los Estados Unidos han hecho uso de la cláusula del artículo 10 del comité y han aprobado el protocolo con esa declaración interpretativa.

Finalmente, quiero decir que también hubo pronunciamientos provinciales. En efecto, en el

Senado se han recibido diversos pronunciamientos de las legislaturas de Salta, de Mendoza y de Misiones —y no sé si habrá más— solicitando la no aprobación de este protocolo. Por lo menos, esas son las manifestaciones que he tenido a la vista al momento de preparar mi discurso.

En consecuencia, quiero decir lo siguiente: nadie está a favor de la discriminación de la mujer. ¡Nadie! Nadie esta a favor de la violación de los derechos humanos de la mujer. No obstante, no podemos sostener —como acá se dijo— que si no aprobamos este protocolo, en la República Argentina no hay respeto por los derechos humanos. ¡De ninguna manera!

La patología la debemos tratar con la patología. Para eso está la señora Lubertino ocupando un cargo en un instituto al cual recurrir ante un caso de discriminación.

Por lo tanto, no hay impedimento para que nos resguardemos mediante una facultad que la otorgó el propio protocolo. No lo estamos inventando los argentinos; el no aceptar este tipo de recomendaciones figura en el protocolo. ¡No es un fantasma! ¡No es una cuestión religiosa! ¡El derecho a la vida es el primer derecho humano y tiene jerarquía constitucional!

La preocupación por el ingreso a este comité, sin tener la declaración, es que va a obligar al Estado argentino. Y como bien se dijo aquí —no recuerdo si fue la senadora Perceval o Isidori; y así también figura en el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de agosto de 2003— no es coercitivo, pero no se puede marginar el impacto público, político e internacional que podría tener el desconocimiento de una recomendación o de una consideración del comité.

Desde 2001 hasta la actualidad han existido varios dictámenes de comisión: uno rechazándolo, otro aprobándolo lisa y llanamente; otro, formulando una sola recomendación; y el último, con dos recomendaciones.

Por lo tanto, solicito a mis pares que avancemos con la aprobación de este asunto, pero con la salvedad del artículo 10; es decir, que podamos oponernos y no considerar competente lo que el comité sugiera respecto de los puntos enumerados en los artículos 8º y 9º, tal como lo han hecho muchos otros países.

En ese sentido, cabe destacar que en el caso de que no se incorpore la recomendación —es decir, la cláusula de interpretación que faculta al Estado argentino en virtud del artículo 10— quien les habla y los senadores Pinchetti de Sierra Morales, Bussi, Basualdo y Rodríguez Saá votaremos en contra del protocolo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: fueron los horrores de la Segunda Guerra Mundial los que llevaron a la comunidad internacional a la construcción de instituciones que resguardaran los derechos humanos.

En el marco de esas instituciones, creadas para que no vuelva a producirse semejante horror en la humanidad y para que esta avance, se desarrolla la convención conocida como CEDAW.

Dicha convención ha sido ratificada por el 90 por ciento de los miembros de las Naciones Unidas y significa, sin lugar a dudas, un hito en el reconocimiento de los derechos humanos.

En ella se describen cuáles son los derechos que se reconocen. Y en el tema que tanto interesa, que es la salud reproductiva, los derechos reconocidos son: salvaguardia de la función de reproducción; aseguramiento del acceso a los servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia —o sea, cuántos hijos queremos tener y con qué espacio de tiempo entre cada nacimiento—; y los que se refieren a la igualdad ante la ley en el matrimonio y en la legislación relativa a la familia. Estos son los derechos reconocidos.

Este protocolo es nada más que la instrumentación de dos herramientas procesales para hacer cumplir esos derechos, en los casos supuestos e hipotéticos en que la legislación y la justicia de un país determinado no los hicieran cumplir.

Por supuesto, desde el reconocimiento de la democracia en la Argentina se respetan los derechos humanos. Pero no han pasado demasiados años desde que en este país se produjeran gravísimas violaciones a estos. Por eso, esta estructura que estamos armando tiende a evitar que, en el futuro, algún gobierno que no permitiera el reconocimiento de los derechos humanos, pueda ser revisado por una instancia internacional.

Tengo un enorme respeto por las instancias internacionales de derechos humanos. He participado en numerosas ocasiones en reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos construyendo, desde el Parlamento Latinoamericano –en la Comisión de Derechos Humanos–, una Subcomisión de Denuncias, a donde invitamos a que aquellos miembros de distintos países que crean que se están violando los derechos humanos en sus naciones, nos hagan llegar esas denuncias para poder realizar nosotros algún tipo de investigación al respecto.

Tengo un enorme respeto por el sistema internacional de los derechos humanos. No soy abortista. Y creo que en la Argentina es absolutamente indudable que la defensa del derecho a la vida desde la concepción tiene rango constitucional. O sea que esto de ninguna manera afecta la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica. Así que no puede considerarse que esta sea la puerta de entrada del aborto en la Argentina. No es así.

El comité no es un tribunal de justicia; no toma decisiones obligatorias para los países. No es una corte internacional de derechos. Es solamente un comité de expertos que analiza una situación y efectúa recomendaciones. Eso es todo. De ninguna manera puede imponer decisiones o cambios en las legislaciones de los países.

En 2002 recibí una nota de la Conferencia Episcopal Argentina que me hacía llegar una documentación del Brasil y de Chile, con algunas supuestas decisiones de dicho comité donde se recomendaba el aborto. En sentido concordante se produjo una declaración de la Cámara de Diputados de mi provincia y un pedido expreso del arzobispo de Salta.

Por el respeto que me merecen la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal y el arzobispo de mi provincia, me tomé el trabajo de analizar cada una de las recomendaciones en los casos donde supuestamente se decía que el comité había recomendado el aborto.

En primer lugar, quiero hablar de Burundi. En este caso, el comité determinó que con motivo de la guerra, el hacinamiento en los campos de refugiados generaba situaciones de promiscuidad y de liberalización de conductas que estaban causando estragos.

Y según denuncia el tribunal, allí se utiliza el aborto como método de control de la natalidad. Se denuncia como algo que debe ser terminado, como algo malo que la legislación del país debe revisar.

En Burundi hay ochocientas muertes maternas sobre cien mil nacidos vivos. En la Argentina son cuarenta sobre cien mil; en Burundi la esperanza de vida, si se sigue propagando el sida, será de treinta y nueve años hacia 2010, y el número de huérfanos por el sida fue de ciento veinte mil en el año 2005. Lo que el comité recomienda son métodos de control de la natalidad y utilización del preservativo. Y pretender descalificar al comité porque se está preocupando por esa atrocidad con relación a los derechos humanos me parece que es muy objetable.

Veamos el caso de Italia; allí hay ley de aborto. Es una ley que ha sido confirmada por los referendos de 1974 y 1981. Establece lo que se llama *consultory*, que son los consultorios donde tiene que ir una mujer que quiere abortar, y en este *consultory* se la tiene que tratar de disuadir. Si tiene un problema económico hay que resolverlo y si tiene un problema de salud, hay que resolverlo, también. El Estado tiene que tratar de resolverle los problemas que la están llevando a querer abortar y, además, se le dan siete días de reflexión. Si, a pesar de esto, quiere abortar se le tiene que abrir la puerta del hospital público. La ley de aborto de Italia también reconoce la objeción de conciencia.

Lo que el tribunal está diciendo es que en el sur de Italia las mujeres no acceden al cumplimiento de la ley por la objeción de conciencia. Es lo que planteamos en nuestra ley con el tema de la objeción de conciencia. Si respetamos la objeción de conciencia, el hospital público tiene que buscar profesionales que no hayan hecho reserva de la objeción de conciencia. Y en Italia el 60 por ciento de los ginecólogos y el 50 por ciento de los anestesiólogos han hecho reserva de conciencia, o sea que de ningún modo están recomendando algo que no sea el cumplimiento de una ley que ha sido debatida en ese país.

En el caso de Libia, lo que dice el comité es que las reservas al protocolo o a la convención, por razón de la ley islámica, son absolutamente incompatibles con los derechos que la comisión recomienda. Entonces, dice que tiene que

revisarse la interpretación del Corán a la luz de las disposiciones de la convención. Es decir, las religiones evolucionan, los derechos de las mujeres también evolucionan en su reconocimiento. Eso es lo que se plantea. Las religiones deberán evolucionar con el tiempo. La interpretación de la ley islámica se ha paralizado desde hace tres siglos.

La situación de Chile es que tenía contemplado el aborto terapéutico. Esa ley de despenalización del aborto terapéutico fue derogada en 1989. La ley establece una pena, por supuesto, para las mujeres que abortan aunque estuvieran en peligro sus propias vidas y esa es la razón para el aborto; y dispone una pena más leve a las mujeres que abortan para ocultar su deshonra. En Chile, el total de muertes maternas es muy alto. El comité denuncia que a las mujeres se les practica el raspaje sin anestesia. O sea, llega una mujer que hizo un aborto ilegal al hospital público y no hay trato humanitario para esa mujer que está muy enferma y agonizante. Se le hace un raspaje sin anestesia y además el médico está obligado a hacer la denuncia penal, y tiene un caso criminal en su contra. Lo que el comité recomienda aquí es la cuestión del aborto terapéutico. Ahí, cuando entra en conflicto el derecho a la vida de esa mujer y el derecho a la vida de la persona por nacer que no sea un problema del Código Penal, es un problema médico y un problema de conciencia.

Los códigos penales autorizan la eximente penal en defensa propia, la defensa de la vida en defensa propia. Y en nuestro país desde el año 1923 está despenalizado el aborto terapéutico, o sea que no hay amenaza en que con esta ratificación del protocolo vayamos a abrir la puerta al aborto terapéutico que existe en la Argentina desde 1923. El caso de Chile es similar al caso de Colombia.

En el caso de Irlanda, lo que señala el comité es la cuestión de la Constitución, que consagra un estereotipo de género. ¿Qué dice la Constitución? Que el Estado debe esforzarse para asegurar que las madres no sean obligadas por razones económicas a trabajar y abandonar los deberes de la casa. Eso es lo que contempla y observa el tribunal como cuestiones de estereotipo de género.

He recibido hace pocos días otra nota de la asesora del Secretariado Nacional para la Fa-

milia de la Conferencia Episcopal Argentina, donde hace mención de los casos de Colombia, Ecuador, Italia, Croacia, a los que ya me he referido. Pero hay temas que dice que no entiende. Por ejemplo, hace alusión a algunas “expresiones ambiguas, no definidas en su texto, como la siguiente...”. O sea que está cuestionando a la CEDAW; ya no al protocolo, sino a la CEDAW, repito. Va al fondo de la cuestión. Lo que está en debate no es el protocolo, no son las herramientas procesales. Lo que está en debate son los derechos reconocidos.

¿Qué significa estereotipos de género? La dominación arbitraria del varón sobre la mujer continúa hoy, todavía, sin interrupción. La subordinación de la mujer al varón es un postulado de los teólogos, que se ha mantenido a lo largo de toda la historia de la Iglesia.

Quiero leer una frase de San Agustín, en la obra *De genesi ad litteram*, que fue después reproducida por Santo Tomás de Aquino, y que dice: “No veo para qué ayuda del varón fue creada la mujer si descartamos la razón de la gestación de los hijos. No comprendo por qué, a pesar de todo se excluye esta finalidad. Si la mujer no fue entregada al varón para ayudarlo en la gestación de los hijos, ¿para qué, entonces? ¿Acaso para trabajar juntos la tierra? Si para esto el varón tuviera necesidad de una ayuda, entonces la ayuda de un varón sería mejor para el varón. Lo mismo hay que decir del consuelo en la soledad; es más agradable para la vida y para la conversación cuando son dos varones los que viven juntos que cuando es un varón y una mujer los que viven uno al lado del otro”.

Esos son los resabios de una cultura muy antigua, una cultura que estamos luchando por superar, que ha costado tanto dolor a tantas mujeres en el mundo. El *apartheid* que los varones que tienen poder en las instituciones religiosas han practicado contra las mujeres agrede la justicia igual que el *apartheid* político. (*Aplausos.*)

El tema de Colombia, al que ya me he referido, es similar al de Chile; solamente se habla del aborto terapéutico. En cuanto a Ecuador, lo único que reclama es que no ha tomado medidas positivas a favor de la igualdad de las mujeres.

Respecto de Bielorrusia, el comité se preocupa por la situación económica de la mujer, caracterizada por la pobreza y el desempleo.

Así es que toma nota con preocupación de que se reemplee a la mujer para puestos por debajo de su nivel de educación y conocimientos. Preocupa también al comité que la mujer suela ocupar puestos con sueldos bajos y en los sectores inferiores del mercado de trabajo, y que persista la disparidad de los salarios de la mujer y el hombre. El comité expresa su preocupación ante la situación económica de los grupos especialmente vulnerables de mujeres, como las jefas de hogar, las ancianas y las mujeres con discapacidad. Esa es la preocupación del comité con respecto a Bielorrusia.

Quiero referirme a China, porque se me dice en la nota –y lo dijo la senadora Negre de Alonso– que en ese país se promueve la prostitución. Al comité le preocupa el hecho de que la prostitución fue el eje del resultado de la pobreza y la privación económica. Como en China es ilegal el ejercicio de la prostitución, está prohibida, no se puede controlar y el sida está creciendo. Lo que pide, entonces, el comité es la despenalización para que se pueda controlar el sida. Y se insta al gobierno a que adopte medidas para la rehabilitación y la reinserción social de las prostitutas. También denuncia y solicita se investiguen los informes sobre la participación de funcionarios locales en la trata y explotación de prostitutas, y se haga comparecer ante la Justicia a todas las personas que participan en esas prácticas.

Kirgistán, me dicen en la nota recibida de la Conferencia Episcopal, que promueve la homosexualidad. El comité, en Kirgistán, expresa su preocupación porque el Código Penal tipifica el lesbianismo como delito sexual y lo que pide es que sea considerado como orientación sexual. De ninguna manera se puede decir que eso significa promover la homosexualidad, y no veo que las instituciones estén haciendo algo para que en la Argentina se penalice o criminalice la homosexualidad. Eso sería una violación a los derechos humanos.

Quiero decir que el comité trata de superar la moral del cadáver de la madre; esa moral antigua según la cual, como la mujer “es de condición inferior”, es mucho más importante que dé a luz aunque ella se muera en el parto, porque quizás el feto sea un varón y entonces tiene más valor que la mujer.

Esas son las cuestiones que el comité está tratando de revalorizar, porque se quiere que

madre e hijo puedan vivir, pero si hay un conflicto debe ser la madre quien tome la decisión del acto heroico –“Quiero dar la vida por mi hijo”– y, seguramente, habrá muchísimas madres que así lo harán.

Deseo referirme al raspaje sin anestesia. Esa parece ser la moral de Jack “el destripador”. Y quiero hacer referencia a algo histórico.

En 1853, los teólogos ingleses protestaron contra el médico personal de la reina Victoria, ya que lo acusaban de haber anestesiado con cloroformo a la reina antes del parto. Veían en ello una vulneración de lo que dice el Génesis, capítulo 3, versículo 16: “parirás con dolor a tu hijo”.

Creo que estamos frente a un protocolo que, indudablemente, va a llevar a un progreso en el respeto por el derecho humanitario y a la mirada humanitaria hacia las mujeres en el mundo.

Quiero concluir con una frase que escribió Ernst Bloch en 1968, amargas palabras denunciando la perversión de cierta moral del Occidente a través de valores falsos. Escribió: “Las mujeres no pueden entrar en la Iglesia con las brazos desnudos, pero judíos desnudos pueden cavar su propia fosa”. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Jeneffes.

Sr. Jeneffes. – Señor presidente: me habría gustado que el presente proyecto de ley que hoy debate el Senado de la Nación hubiera tenido su debate previo en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

Sé perfectamente que se trata de un proyecto que tiene una larga estadía en esta Cámara.

En 2001 se emitió el primer dictamen, por el que se aconsejaba la ratificación del protocolo facultativo. Luego, en el 2004, se volvió a considerar en la Comisión de Relaciones Exteriores y en esa oportunidad se emitieron tres dictámenes: uno, suscrito por la señora senadora por San Luis, donde se aconsejaba el rechazo o la no ratificación del protocolo; otro, que se entendió como dictamen de minoría porque era el que tenía la menor cantidad de firmas, aconsejaba la aprobación del protocolo; y un tercer dictamen, que se lo entendió como de mayoría –que fue el que suscribí en el año 2004–, donde

aconsejábamos la ratificación del protocolo pero con dos declaraciones.

Como consecuencia del cambio o recambio de senadores y por imperio del artículo 106 del reglamento, ese dictamen ha caído y, por ello, fue necesario tratar hoy sobre tablas este proyecto, cuando a mí me hubiese gustado que debatiéramos nuevamente el tema en la comisión, de manera tal de escuchar a las dos partes: o sea, a quienes dicen que debemos ratificar el convenio y a aquellas voces que sostienen que no debemos ratificarlo. Pero, lamentablemente, hoy estamos aquí, en pleno debate, porque se ha aprobado el tratamiento sobre tablas de este proyecto en Senado de la Nación y debemos manifestar una opinión al respecto.

Por lo tanto, siendo coherente con mi posición del 2004, yo sostengo que se debe ratificar este protocolo facultativo, ya que no estoy absolutamente en contra de él ni de la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación de las Mujeres, que, según entiendo, es un instrumento fundamental en la vida de la República Argentina. Pero también considero válido que podamos hacer uso del artículo 10 del Protocolo Facultativo, que expresamente establece que todo Estado parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente protocolo o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del comité establecido en los artículos 8º y 9º. Esa era una de las declaraciones que introdujimos en el dictamen firmado en el año 2004, junto con algunos otros senadores, entre los que se encontraba usted, señor presidente.

Esta reserva del artículo 10 es fundamental para no resignar soberanía de la República Argentina, ya que existen dudas acerca de si se está afectando o no la soberanía, la jurisdicción y la competencia de nuestro país.

Entiendo perfectamente que de la lectura del Protocolo Facultativo no surge, en realidad, que el comité imponga decisiones que afecten el derecho positivo de la República Argentina, la Constitución, los tratados internacionales y las Constituciones provinciales, pero existe un gran temor acerca de la fuerza de las recomendaciones que efectúa el comité. Como consecuencia de ello, entiendo sano que hagamos uso de la facultad del artículo 10, prevista expresamente en el Protocolo Facultativo, destacando que de

los 179 países que han firmado la convención, de acuerdo con la información que tengo, sólo 71 han ratificado el protocolo y 108 hasta ahora no lo han hecho, porque como lo dice su nombre, es un Protocolo Facultativo que cada uno de los países podrá o no ratificar.

En segundo lugar, entiendo que deberíamos también sostener aquella declaración que habíamos fijado en el dictamen, de que la ratificación del protocolo bajo ningún concepto significaba afectar lo que decía la Constitución, el derecho positivo, los tratados internacionales con relación a la defensa de la vida a partir de la concepción. Este es un tema importante.

Estas declaraciones no son novedosas. Así, por ejemplo, en oportunidad de dictarse la ley 23.489 que aprobó la Convención de los Derechos del Niño, se dijo en el artículo 2º del proyecto de ley, con relación al artículo 1º de esa convención, que la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido de que se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad.

Por lo tanto, estas dos declaraciones que habíamos impuesto en el dictamen de ninguna manera constituyen una cuestión novedosa, de ninguna manera afectan el Protocolo Facultativo y clarifican las dudas que algunos argentinos tienen.

En mi provincia, la provincia de Jujuy, 12.789 jujeños y jujeñas han hecho llegar a los otros dos senadores de la provincia y al que habla un pedido para que no ratifiquemos el protocolo.

Por ende, y siendo coherente con lo que sostuve en el año 2004, por las razones que he expuesto en dicha oportunidad, por lo que voy a pedir que se inserte en el Diario de Sesiones como fundamento de doctrina y jurisprudencia y antecedentes, adelanto mi voto positivo a la ratificación del protocolo siempre y cuando se tengan en cuenta estas dos declaraciones. En caso contrario, mi voto va a ser por el rechazo del protocolo.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.

Sra. Mastandrea. — Señor presidente: hoy, un periodista me preguntaba por qué demoramos tanto en aprobar este protocolo. En realidad, las mujeres estamos tan acostumbradas a

esperar tanto por todas las cosas que viene a mi memoria la película en la que Barbra Streisand personificaba a un hombre para que la dejaran aprender a leer. ¿Cuántos años han pasado para que la mujer tenga derecho a aprender a leer? Desde que ocurrió eso, hace tantísimos años, cada pasito que las mujeres hemos dado nos ha llevado años y años.

Quiero también decirles que la catarata de *e-mails* que hemos recibido, en contra, está demostrando una realidad de las mujeres y hombres que tienen la posibilidad de tener acceso a la tecnología que ello implica, que son una minoría selecta en la República Argentina. Desgraciadamente, en el NEA y en el NOA muy pocos nos pueden mandar *e-mails*, porque no tienen cómo hacerlo. Cuando me hablan de 12.000 firmas, señalo que la primera asamblea de mujeres a la que concurrí —sacaba la cuenta cuando la veía a Mabel sentada a mi izquierda— fue exactamente hace veinticinco años. Doce mil personas nos juntábamos en un encuentro en el que decíamos que esto era válido. Después de veinticinco años de asistir permanentemente a asambleas y reuniones de mujeres, creemos que este tema está terriblemente debatido, consensuado y tratado.

También creo que la primera discriminación se produjo hoy, cuando no dejaron entrar a las mujeres a las galerías por razones de seguridad. (*Aplausos en las galerías.*) Por suerte, la verdad es que este aplauso es para todas las que anteriormente hablaron, cuando no estaban las chicas arriba. Pero me pongo muy contenta.

Decía que esa fue la primera discriminación, porque la verdad es que es la primera vez que veo que pasa esto.

La segunda gran discriminación es pretender que esta convención, que tiene jerarquía constitucional, no tenga su protocolo. ¿Por qué las otras convenciones —la racial, la penal, etcétera— tuvieron su protocolo, y para ésta, que es la convención más ratificada, la segunda más ratificada en el mundo, necesitamos esta discriminación?

Hoy he estado muy contenta, porque no importa todo esto, ya que estamos tan acostumbradas a que nos pase esto, a que a cada paso que damos tengamos que poner la mejilla para recibir una cachetada y después ponemos la otra. Pero nosotras no nos agachamos, seguimos

adelante, porque estamos muy convencidas de lo que pensamos; estamos plenamente seguras de que sólo estamos tratando de que haya una humanidad mejor. Y esa humanidad mejor va a ser cuando mujeres y hombres tengamos las mismas posibilidades en este mundo.

Creo también que es una actitud de soberbia decir que no necesitamos el protocolo, que solamente con las instituciones que tenemos está bien. Después, voy a tratar de explicarlo con algunos casos o ejemplos. Pero realmente es soberbia decir que no necesitamos ayuda, porque esto, después de todo, es una ayuda.

También, acuérdense de que en 1979 fue la primera vez que la Asamblea de Naciones Unidas aprobó este texto, esta convención. En 1985, la República Argentina lo aprueba. ¿Les parece que no ha pasado suficiente tiempo para debatir?

Y voy a pedir insertar, porque no quiero detenerme en explicar lo que mis amigas y amigos ya han dicho. Sí quiero que quede bien claro que este instrumento es simplemente algo que fortalece lo que está en la convención. No crea ningún derecho nuevo y lo único que hace es ampliar el sistema de monitoreo internacional que vamos a tener sobre las cosas.

Se afirma que la ratificación del protocolo habrá de imponer a los Estados parte obligaciones distintas o que ampliará el alcance de los contenidos en la convención, violentando la soberanía legislativa de la Nación.

No voy a repetir los clarísimos ejemplos que una vez más da la senadora Escudero —que siempre nos da una clase—. Yo diría que tales aseveraciones surgen de una lectura superficial y tergiversada de los instrumentos jurídicos y de los informes del comité, cuyas observaciones y recomendaciones se citan fuera de contexto, como parte de una campaña de desorientación para evitar la ratificación o la aprobación de este protocolo.

Estamos convencidos de que este protocolo es una herramienta fundamental que nos va a ayudar a hacer cumplir la Convención sobre Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer.

Y cuando hablaban de que no hay dictamen en la comisión, no voy a hacer toda la historia del trámite parlamentario ni voy a citar a nin-

gún senador que en este momento creo que ha cambiado de opinión. Porque a veces, la historia puede llevar a reflexionar de otra manera; por lo tanto, no voy a hacer nombres. Pero el 6 de septiembre de 2001, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con la firma de diez senadores, emitió dictamen favorable a la aprobación del Protocolo Facultativo. Dicho dictamen fue publicado en el Orden del Día N° 838. O sea que había un dictamen. Por supuesto, luego de idas y vueltas, finalmente ahora, el 30 de diciembre, nos volvimos a alegrar porque dijimos: bueno, si el Ejecutivo lo manda, esto no va a tener ningún problema.

Sr. Presidente (López Arias). – La senadora Giri le pide una interrupción.

Sra. Mastandrea. – Cómo no.

Sr. Presidente (López Arias). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Giri.

Sra. Giri. – Le agradezco mucho, senadora Mastandrea.

He pedido esta momentánea interrupción simplemente para expresar un par de reflexiones a las que me han llevado mis compañeras senadoras.

Por un lado, quiero referirme al cansancio que sentimos muchas mujeres de seguir diciendo las mismas cosas desde hace tantos años y también al cansancio de escuchar que nos digan las mismas cosas desde hace tantos años. Las mujeres no tenemos derechos porque lo digan las convenciones, los tratados o la Constitución; tenemos derechos porque somos personas.

Hay una soberanía –que no es la del país– que sí se viola sistemáticamente: la soberanía sobre la propia intimidad; la soberanía sobre la capacidad para decidir. La senadora Escudero ha hecho una reflexión exhaustiva sobre los distintos países y los motivos por los que el comité ha hecho determinadas recomendaciones. En tal sentido, yo quiero rescatar la idiosincrasia de cada pueblo y el hecho de que el comité se ha movido respetuosamente, teniendo en cuenta esas idiosincrasias.

Acá se ha hablado de ciertos países. No sé si todos los conocemos y sabemos de algunas de sus realidades. Los checos constituyen un país donde la mayor parte de la ciudadanía es atea y tiene otros conceptos sobre las mismas

cosas respecto de las cuales nosotros sentimos y pensamos.

También quiero aclarar –y lo hago cada vez que se tocan estos temas– que no soy pro aborto. Nunca lo fui. No soy abortista, pero siempre voy a elegir el derecho de las mujeres a decidir y la vida de las mujeres.

De hecho, cuando desde estas y otras bancas de las provincias peleamos durante tantos años por la educación sexual, la planificación familiar y para el uso de anticonceptivos se nos daban los mismos argumentos que hoy se están esgrimiendo para no aprobar este protocolo.

Se ha hablado de países africanos...

Sr. Presidente (López Arias). – Señora senador: los señores senadores me van a poder acusar de que estoy cambiando la lista de oradores. Le pido que la interrupción sea concisa.

Sra. Giri. – Disculpe, tiene razón, señor presidente.

Cierro con esto: los países africanos a los cuales aquí se hizo mención son naciones en las cuales la mayoría de la población vive de un modo tribal absolutamente distinto de nuestro estilo de vida occidental. Son países donde está permitida la ablación del clitoris. Entonces, me gustaría que alguna vez, con el mismo énfasis que hoy nos cuestionan, salieran a decir que no se realicen más ablaciones de clitoris. Tal vez no lo hacen porque la ablación del clitoris impide el goce sexual.

Sr. Presidente (López Arias). – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Mastandrea.

Sra. Mastandrea. – Para no abundar en temas que ya se han tratado, de los 30 artículos sólo me voy a referir a tres, por creer que son los que quizás estén demostrando más acabadamente la necesidad que tenemos de ayuda; no tengamos la soberbia de pensar que no necesitamos ayuda.

Primero, con respecto al artículo 7º, referido a la participación igualitaria en la vida pública y política, quiero decir que las mujeres que estamos aquí –aunque reneguemos y digamos que no– ocupamos estas bancas gracias a la Ley de Cupo. Yo estoy segurísima de que no estaríamos sentadas en el número en que hoy estamos aquí si no hubiera habido una Ley de Cupo que nos avalara. Entonces, realmente tenemos que

reconocer que esa Ley de Cupo que ponía un 30 por ciento de piso se convirtió en un 30 por ciento de techo.

Por eso, además, hoy quiero felicitar al gobierno de Entre Ríos, ya que su nueva ley electoral aprobó el 50 por ciento de mujeres en las listas. Mis felicitaciones a los senadores de la provincia de Entre Ríos. Aquí tengo a mi lado al senador Taffarel. Sin embargo, ese 30 por ciento que las mujeres obtuvimos —cuando en este momento somos más en el Senado— no fue por una simple elección, sino porque estábamos segundas en las listas. Entonces, cuando muchos de los titulares pasaron a ocupar cargos en el Poder Ejecutivo, nosotras pudimos acceder a las bancas. Hay que tener claridad en el tema de la suplencia.

Sr. Presidente (López Arias). — La senadora Negre de Alonso le solicita otra interrupción.

Sra. Mastandrea. — Cómo no.

Sr. Presidente (López Arias). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. Sea muy breve, por favor.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: quiero hacer una acotación porque, si no, ponemos a todos en la misma bolsa. En realidad, no por mí sino por mi provincia que tiene una decisión política del Partido Justicialista, estoy en el Senado desde 2001, cuando no había Ley de Cupo.

Sr. Presidente (López Arias). — Continúa en el uso de la palabra, la señora senadora Mastandrea.

Sra. Mastandrea. — Cuando hablamos de estos temas, nos referimos a la generalidad y no a las excepciones.

También quiero aclarar que el hecho de que seamos muchas no quiere decir que tengamos poder en la misma proporción. ¿Por qué digo eso? Porque a veces, vienen con el cuento: “¿Para qué siguen luchando si ya tienen todo, si hay igualdad de oportunidades?” No es verdad que haya igualdad. Aseguro que no. ¿Cuántas mujeres presidentas tenemos en América? ¿Cuántas mujeres presidentas han accedido al cargo por portación de apellido? ¿Cuántas mujeres presidentas fueron rodeadas por un montón de asesores que las llevaron a cometer las más crueles canalladas? Esas mujeres no son las únicas. Por suerte, hay otras mujeres —como

Michelle Bachelet— que han logrado llegar por méritos propios.

Sin embargo, para poder decidir, para poder transformar y para poder hacer, también necesitamos poder. Y cuando me dicen que ya tenemos poder, vuelvo a señalar que el verdadero poder está cuando uno puede decidir todo y no simplemente cuando ocupamos algunas bancas por una ley que nos obliga a hacerlo. Prácticamente, no hay mujeres presidentas.

Cuando me refiero al artículo 6º y me dicen que no hace falta el Protocolo Facultativo, quizá debieran caminar por algunas calles de las provincias del norte y ver en cada esquina a una niñita producto de la explotación sexual, tal vez de un grupo que ni siquiera vive en la República Argentina. El problema de la trata y la explotación humana es demasiado grave en este país como para decir que no necesitamos ayuda.

Además, cuando analizamos los principales problemas de salud, vemos que son distintos en el hombre y en la mujer. El último análisis que hizo la Fundación Friedrich Ebert dice que los principales problemas en la mujer son: el embarazo adolescente, 21 por ciento; el abuso sexual, 20 por ciento; y la violencia sexual, 14 por ciento. Podría seguir enumerando, pero todos están relacionados con la trata y la explotación sexual. Dos de cada diez mujeres declararon haber sido víctimas de alguna situación de violencia sexual.

Según el Centro de Encuentro Cultura y Mujer, en los últimos 30 años se registraron en promedio 600 denuncias policiales anuales. Si tenemos en cuenta que sólo diez por ciento de mujeres realiza la denuncia, quiere decir que hay 60 mil casos de abusos anuales. ¿Saben qué significa eso? Dieciséis casos por día. Es decir, estamos admitiendo que a nuestras niñas mujeres las sometan a ese tipo de aberraciones. Por lo tanto, necesitamos todas las herramientas que estén a nuestro alcance.

Por último, voy a citar los artículos 11 y 14, que hablan de igualdad salarial y del trabajo de la mujer rural. La OIT afirma que de los 550 millones de trabajadores más pobres del mundo, con un ingreso inferior a un dólar diario, el 60 por ciento son mujeres. El informe revela que, actualmente, 1.100 millones de trabajadoras son mujeres de un total de 2.800 millones de

trabajadores. Sin embargo, esta masiva incorporación de mujeres al mercado laboral no ha significado una mejora en sus condiciones socioeconómicas.

En el empleo informal, la mayoría son mujeres y, además, el nivel salarial es inferior al del hombre en 30 por ciento.

Si analizamos la brecha del género por regiones—que es el cociente entre el porcentaje de mujeres y de varones a los que no se les efectúa descuentos jubilatorios en cada grupo de edad—, las que presentan mayor índice de precariedad son el NEA y el NOA.

Ahora bien, valiéndonos del excelente trabajo de la licenciada en economía, María Cristina García, denominado *Análisis del mercado laboral en la Argentina desde una perspectiva de género*, debo decir que si tomamos en cuenta la distribución por género, da la casualidad de que en el rubro “patrón”—fijense que no figura “patrona”—las mujeres tienen una presencia de 18 a 22 por ciento como máximo; en cambio, las mujeres representan un 65 por ciento en el rubro “trabajadores sin salario”.

Si encabezamos la diferencia por actividad, en “servicio doméstico”—término asexuado porque, generalmente, se dice “la doméstica” y nunca “el doméstico”—91,4 corresponde a mujeres; y en la enseñanza, ellas representan 78 por ciento. Afortunadamente, acá decimos “maestro” y “maestra”.

Pero, quizá, el dato más indigno —y tal vez lo sienta más por vivir en un área rural— se ve reflejado en el trabajo de la mujer rural, que está invisible. Efectivamente, cuando converso con las mujeres de la Federación Agraria —que por suerte se han federado y por desgracia no pueden estar aquí presentes, porque viven muy lejos de Buenos Aires—, notamos que las mujeres rurales, prácticamente, no están consideradas ni siquiera para las estadísticas. No existen. Y cuando el INDEC las mide, lo hace en el rubro “huertas” o “huertas comunitarias”.

Yo quisiera decirles a las mujeres de las provincias aquí presentes —la mayoría—, que las mujeres estamos al lado de la vaca, manejando el tractor, al frente de los reclamos salariales en el campo; desde el norte, con la agricultura y la ganadería, hasta el sur, en las minas. ¿O no es así? Sin embargo, para el INDEC —que no tiene

la culpa, porque estos son patrones ancestrales que venimos postergando—, no se mide el trabajo de la mujer rural; no existe.

Les puedo asegurar que si la familia rural permanece en el campo es gracias a esa excelente labor de la mujer, que trata de quedarse junto al marido para no llegar al desarraigo total.

Y voy a terminar citando dos logros que me parece importantísimo recalcar. Uno es la gran cantidad de empleadas domésticas que han logrado pasar a la formalidad. Creo que esto es algo que hay que destacar porque, indudablemente, muchas mujeres han logrado que se las blanquee; y esto es fundamental.

El otro trabajo que considero importante resaltar es el de la Comisión Tripartita, donde se trata el tema de la igualdad salarial. Dicha comisión realizó una excelente labor en cuanto a la temática; pero, además, lo que más nos maravilla es que está recorriendo la República Argentina y está tratando de que en todas las provincias se hable de la igualdad salarial para varones y mujeres.

Finalizo agradeciendo profundamente a todas las asociaciones de mujeres que durante estos últimos veinticinco años —míos, por lo menos— nos han acompañado, porque hoy nosotras somos nada más que la voz que ellas nos otorgaron. No estaríamos acá si no fuera por el mandato de ese gran número de mujeres que hay en la República Argentina y que durante tantos años no han bajado los brazos y han seguido luchando por algo tan simple como es la protección de los derechos de la mujer. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Fellner.

Sra. Fellner. — Señor presidente: la verdad es que cuando estamos ante el trance de tener que tomar una decisión —aun en cosas tan cotidianas de nuestra vida— ponemos todo en la balanza y nos preguntamos para qué, cuáles van a ser los beneficios y las consecuencias.

Nosotros ocupamos estas bancas en representación del pueblo que nos ha votado; yo lo hago en representación y en defensa de los intereses de la provincia de Jujuy. Después de todo lo escuchado, es muy difícil decir que me opongo a esta sanción. Sin embargo, todo esto ya está

en la convención. Y nosotros la aprobamos por ley, por la ley 23.179.

Además, la República Argentina hizo una reserva consistente en no aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia en las controversias que pudieran suscitarse por la aplicación de la convención. Entonces, ya tenemos la convención. Y el comité ya existe y formula recomendaciones que, como ha explicado la señora senadora Escudero, son buenas.

Entonces, mi pregunta sigue siendo la misma, porque también escuché al miembro informante afirmar que este protocolo es facultativo u opcional. O sea, no es que nos obliga a estar dentro de la convención y así poder ayudarnos. No, señor presidente. La convención ya está y el Protocolo Facultativo es opcional: lo aceptamos o no.

En ese sentido, la miembro informante afirmó que no agrega ni introduce nuevos derechos, ni amplía los ya reconocidos en la convención. O sea, es lo mismo. Entonces, uno se pregunta para qué el Protocolo Facultativo. Pues bien, existe una razón: el protocolo amplía las facultades y otorga más fuerza a ese comité.

También he escuchado a algún señor senador afirmar que, de esta forma, vamos a demostrar que estamos en contra de toda forma de discriminación hacia la mujer. Me pregunto quién puede no estarlo hoy, sobre todo siendo mujer.

Señor presidente: pienso que la forma de decir a las mujeres y a los hombres de la República Argentina que estamos a favor de la convención y en contra de todas las formas de discriminación contra la mujer es mediante las leyes.

En ese sentido, hemos estado actuando. Este Congreso ha actuado y sigue trabajando en ese rumbo. Por ejemplo, se ha aprobado una ley de salud reproductiva; otra de educación sexual; se está trabajando en proyectos de procreación asistida; y se ha trabajado contra todo tipo de violencia contra la mujer. Todo esto demuestra que estamos a favor de la convención.

Por ello, no encuentro por qué tenemos que decir que vamos a demostrar que lo haremos si aceptamos el protocolo, que lo único que hace es otorgar mayor fuerza y atribuciones a un comité.

¿Qué es el comité? Como todos los otros, está formado por expertos de una gran moral, por los cuales sentimos un gran respeto, pero que lógicamente actúan en nombre propio y no en nombre del país al que pertenecen.

Además, si aceptáramos el protocolo, ellos nos van a decir a nosotros, los legisladores—que tenemos que pasar por el voto popular y dar explicaciones sobre lo que hacemos—, qué es lo que tenemos que hacer en nuestra Argentina.

Tengo mucho respeto por la diversidad cultural y por las instituciones de cada uno de los países. Tengo ese respeto y quiero que todos lo tengan. Ahora bien, me pregunto, ¿nosotros no somos capaces de decidir qué es lo que queremos hacer? ¿Tenemos que esperar a que venga un comité y brindarle más atribuciones para que nos diga lo que tenemos que hacer aquí, en la Argentina?

Si los argentinos queremos el aborto, el casamiento entre personas del mismo sexo, si deseamos trabajar sobre temas como la prostitución, debemos ser los argentinos quienes los resolvamos. No necesitamos un comité con un montón de atribuciones para que nos venga a decir que lo debemos hacer y cómo.

Si aprobamos esta iniciativa, dicho comité no solamente podrá recibir denuncias de una persona o de un grupo de mujeres, sino que también podrá venir a la Argentina y efectuar investigaciones en ese sentido. Esto es lo que estamos haciendo; solamente eso.

Ahora bien, esta posición no significa que esté en contra de la convención. No voy a permitir a ninguna mujer afirmar que votar negativamente hoy significa estar en contra de la convención. No es así; solamente estoy en contra de otorgar más atribuciones a un comité formado por 23 personas que responden a ellos mismos. ¿Qué pueden conocer de la realidad de la Argentina? ¿Qué pueden conocer, por más expertos, por más autoridad moral que tengan, acerca de los problemas que hay en Jujuy, en el campo, senadora Mastandrea? Y les quiero decir que las doce mil setecientas ochenta y nueve firmas son escritas, no me las mandaron por *e-mail*. Hace muy poquito hubo en Jujuy lo que se llamó Encuentro de Mujeres Autoconvocadas. Eso se pareció más a un desencuentro que a un encuentro. Estuve en varios talleres y había más desencuentros que encuentros. Varias

de esas firmas surgieron de ese taller porque no todas –y no sólo las de Jujuy– estaban en contra de ese protocolo. Queremos que las cosas las decidamos acá, nosotros, los argentinos, y seamos nosotros los que tengamos que votar, no diciendo que me lo dijo fulano de tal que está allá, en la ONU.

Respecto de los comités, hoy están incluso en discusión en la ONU porque –como dijo la senadora y como lo están explicando desde hace rato– tienen atribuciones para determinar qué es lo que dice la convención, que van mucho más allá de lo que ella dice. Esas son las sugerencias y la verdad es que yo me siento argentina y quiero decidir las cosas en la Argentina. Las convenciones son muy buenas, me muestran un camino, me muestran lo que hay que hacer, pero quiero decidirlo acá.

Por eso, señor presidente, creo que es totalmente inconveniente e innecesaria la aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW. Por la representatividad de estas doce mil setecientas ochenta y nueve firmas de jujeños y jujeñas y por convicción propia, voy a votar en forma negativa el Protocolo de la CEDAW, reiterando que estoy totalmente de acuerdo con la CEDAW pero no con su Protocolo Facultativo.

Sr. Presidente (López Arias) . – Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.

Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de Salta se han pronunciado solicitando a los senadores nacionales que representan a nuestra provincia la no ratificación del Protocolo Facultativo que estamos considerando.

Las declaraciones emitidas por ambas cámaras nos fueron comunicadas acompañando copias de las versiones taquigráficas de los respectivos debates que se suscitaron en el recinto de las legislaturas provinciales.

La verdad es que cuando uno las lee ve que se expresaron distintos argumentos, varios de ellos coincidentes con los que han expresado en este recinto la senadora Negre de Alonso, el senador Jeneffes y la senadora Fellner. Todos hemos recibido notas de uno u otro carácter conteniendo inquietudes sobre este tema. Hemos recibido la visita de personas o de organizaciones. Lo cierto es que acá también existe un temor real y concreto, y es que las mayores facultades que se

le da al comité creado por la convención puedan terminar en recomendaciones hacia nuestro país en el sentido de despenalizar el aborto y de abrir una instancia internacional que pueda terminar instándolo a modificar su derecho positivo en este aspecto.

Todos conocemos la cláusula en la Constitución modificada en el año 1994, contenida en su artículo 75, inciso 23, que establece la protección de los niños desde el embarazo, así como también el Pacto de San José de Costa Rica, que protege la vida desde el momento de la concepción. Asimismo, la Argentina ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño con una reserva, manifestando que se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los dieciocho años de edad.

Las disposiciones del Código Civil son muy claras. Pero este es nuestro derecho vigente. Hay quienes piensan que esto debe modificarse y algunos también creen que, en este instar a un cambio de la legislación argentina, los organismos internacionales pueden jugar un papel.

Existen distintas confesiones religiosas que también se han expresado sobre el tema. Hoy se nos distribuyó una nota firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que expresa el punto de vista de la Iglesia Católica que, sin duda, tiene una representatividad y significación importante dentro de nuestra sociedad. Es, además, la confesión religiosa a la que pertenezco en función de mis propias convicciones.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, cardenal Bergoglio, en la nota que dirige al presidente de nuestro Senado, expresa lo siguiente: “Una vez más queremos hacerle llegar respetuosamente la postura de la Iglesia Católica en un tema particularmente delicado como es la aprobación del CEDAW.” Luego agrega: “Si bien el proyecto general se presenta, como dice su título, contra toda forma de discriminación contra la mujer, y en este objetivo de evitar cualquier discriminación todos coincidimos y estamos comprometidos, al momento de interpretar qué significa discriminar o atentar contra la dignidad de la mujer, tenemos diferencias”.

Continúa diciendo el cardenal Bergoglio: “La actuación del Comité en cuestión muestra, en su

obrar, la promoción del aborto. Y más adelante particulariza que no se persigue, por lo tanto, como objetivo, la promoción de la mujer sino que se presiona a los Estados a fin de lograr la despenalización del aborto”.

Más adelante expresa que, en virtud de las facultades que el protocolo otorga, se podrían generar denuncias contra el Estado argentino, que darían lugar a la intervención del comité, que tendría competencia para invitar a nuestro país a adoptar medidas, por ejemplo, en torno al aborto y su despenalización.

Es decir, está claro que ninguno de nosotros quiere ninguna forma de discriminación contra nadie y menos aún contra la mujer. Esto está absolutamente claro. Pero también es evidente que existe preocupación en sectores importantes dentro de nuestras propias comunidades, a las que representamos en este Senado, y en la sociedad en general. ¿Cuál es esa preocupación y ese temor? Es que esta instancia internacional sea utilizada en pos de una despenalización del aborto. No podemos ignorar ese temor y esa preocupación.

Por eso, la verdad es que, por lo que se ha expuesto y vengo escuchando en el curso de este debate, es de lamentar que estemos tratando esto sobre tablas. Se me podrá decir que esta cuestión se encuentra, desde hace tiempo, a consideración de este Senado. Es cierto; pero la verdad es que los dictámenes de comisión siempre ayudan a organizarnos y al trabajo legislativo.

Si tenemos este temor en la sociedad, que está expresado a través de lo que he manifestado y de lo que han manifestado otros señores senadores en este recinto, me pregunto por qué no disiparlo y por qué no seguir el camino del dictamen en mayoría de 2004, que introdujo dos reservas muy claras y muy precisas, que establecen que ninguna norma del protocolo facultativo puede interpretarse violando el derecho a la vida a partir de la concepción, tal como está reconocido por la Constitución y por la legislación argentina, y la que hace uso de la opción que da el artículo 10 del protocolo respecto de sus artículos 8º y 9º.

Esto posibilitaría construir un consenso sobre este punto y llevar tranquilidad a sectores de nuestra sociedad que están preocupados por el tratamiento que hoy se realiza en el Senado de la Nación.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: sería difícil a esta altura del debate agregar elementos nuevos, ya vertidos con mucha sustancia y fundamentación, sobre todo por parte de la miembro informante.

En ese sentido, adelanto mi voto afirmativo porque fui autor de aquel dictamen que aprobaba el protocolo sin modificaciones; dictamen que quedó en minoría.

Es verdad que el debate ya lleva mucho tiempo en el Parlamento argentino –seis años para ser exactos–, con diversas formas de tratamiento, pero no es nuevo. Y quiero felicitar a las mujeres porque, de alguna manera, si muchos de los temas que aquí se mencionaron significaron un avance positivo en la legislación argentina ha sido un producto ineludible de la participación política de las mujeres.

Creo que hoy, que se habla de la vieja y la nueva política, sin lugar a dudas los nuevos temas de la agenda política fueron introducidos en gran parte por las mujeres.

Por eso, tenemos una ley de salud reproductiva y procreación responsable o una ley de educación sexual o la de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; es decir, temas que quizás hubieran tardado más tiempo en llegar al Congreso de la Nación de no haber sido por la participación de las mujeres.

Rescato estas cosas porque, además, vienen de la mano con otra cuestión. Se dan con una particularidad que no es propia de otras leyes.

No es habitual que en el Senado de la Nación se aplauda la aprobación de un proyecto. Pero esta clase de normas se aplauden y en forma espontánea porque son avances no sólo desde la razón y del progreso positivo de la legislación sino que también son conquistas que llegan luego de largas luchas.

Por eso esas mujeres, que estuvieron tantos años en minoría y vienen luchando tanto, saludan el hecho de llegar a esta instancia que, en definitiva, es la concreción de sueños. Es decir, ver esas luchas concretadas en la legislación.

Por otro lado, también hay un lenguaje no habitual en el recinto.

No era habitual en la historia del Parlamento argentino que se hable con tanta crudeza, como

es el lenguaje que se ha introducido a partir de la participación política de la mujer.

El “de eso no se habla”, esa barrera cultural que permaneció durante muchísimos años y épocas del Parlamento, impedía que se abordaran los temas de la forma en que ahora se lo hace. Y me refiero no sólo a la manera en que se dicen las cifras de lo que son las mujeres adolescentes que abortan a los 14 o 15 años y llegan con hemorragias indetenibles a los hospitales, y encima son encarceladas. Esto no se decía en el Parlamento argentino. Pero hoy se dice, se habla y se intercambian visiones. Y la mayoría de esto hoy se expresa en nuevas leyes.

Con respecto a la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer, la señora senadora Escudero decía muy bien que la propia génesis de las Naciones Unidas surgió después de las grandes catástrofes. No surgió antes; no fueron convenciones, tratados u organizaciones preventivas de las catástrofes, sino que vinieron después de ellas para que esas catástrofes, a través de estas convenciones y de la racionalidad internacional, no se volvieran a concretar. Y así nació Naciones Unidas. De ahí, también surgió la convención contra las torturas y otras más.

Si fue necesario que surgiera una convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer es porque a lo largo de la historia ella ha sido una tragedia en el mundo. Por eso fue necesaria una convención para evitar la tragedia que significa ese tipo de discriminación.

Creo, entonces, que este consenso logrado, a través del cual todo el mundo va a decir por unanimidad sí a la convención contra la discriminación de la mujer, es un avance positivo de los nuevos tiempos. Porque ya nadie se anima ni osaría decir que no está contra la discriminación de la mujer, como tampoco nadie hoy se animaría a decir que está contra la paz, pero en el mundo hay guerras. Nadie dice que está a favor de la guerra, a pesar de que apareció la teoría de la guerra preventiva.

Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Giustiniani: la señora senadora Gallego le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Giustiniani. – Cómo no.

Sr. Presidente (López Arias). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Gallego.

Sra. Gallego. – Señor presidente... (*Aplausos.*) ...muy brevemente, quiero abonar algunos de los criterios que está planteando el señor senador Giustiniani.

Hay una relación curiosa en este cuerpo, en el Senado de la Nación, respecto de esta nueva agenda que planteaba el senador. En ese sentido, es cierto que hoy es políticamente correcto decir que nadie piensa que es bueno discriminar a las mujeres, pero yo quiero pedirles disculpas a las mujeres no solamente porque debimos empezar el debate con ellas en otra sala... (*Aplausos.*) sino por las ausencias que hay dentro de este recinto. Porque ni bien se puso el tema en discusión y nuestra miembro informante empezó su fundamentación, en el recinto quedamos muy pocos senadores. Eso sí muestra que el discurso va en un sentido pero que nuestras propias acciones van en otro.

Por ello, frente a lo que está planteando el señor senador Giustiniani yo quiero pedir disculpas a las mujeres que están hoy aquí y al resto de las luchadoras por los derechos de las mujeres, porque esto es vergonzoso. Nuestros senadores se fueron; estuvieran a favor o en contra del protocolo debieron haber estado aquí, como sucede cuando se tocan los temas económicos; en esos casos no se levanta nadie. Y hoy, desde mi pertenencia al bloque del Frente para la Victoria, quiero pedir disculpas porque para mí esto es vergonzoso. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (López Arias). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero recordar que esta convención internacional en contra de la discriminación contra la mujer plantea cuestiones muy simples. Por eso creo que este debate se entiende en toda la sociedad. No estamos hablando de tecnicismos jurídicos y constitucionales. Estamos hablando de la ratificación de un protocolo de una convención que dice que considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres –recalco, igualdad de derechos de hombres y mujeres–

preocupados; sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, resueltos a aplicar los principios enunciados en la declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, y para ello adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones, han convenido lo siguiente: y ahí se plantean los treinta artículos de la convención.

Entonces, el protocolo viene a establecer, como muy bien se explicó durante todo el debate, un procedimiento de exigibilidad y aplicabilidad que no tiene ninguna connotación especial respecto de otras convenciones, las que también plantean procedimientos de exigibilidad y aplicabilidad, como en el caso del artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en vigor desde 1969, que permite denuncias al comité relacionadas con la eliminación de la discriminación racial; o el artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en vigor desde 1987, que permite denuncias ante el comité; o la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, que tiene sanción de este Senado, que también establece un procedimiento de denuncia.

Es decir, no se nos ocurriría plantear que un mecanismo de reclamo para la discriminación racial es coherente, y no es coherente o nos produce muchos temores que sí lo sea para la discriminación sexual. Yo creo que esto pone en evidencia que en nuestro país tal vez la discriminación sexual pueda ser menos condenable que otra discriminación.

Entonces, el establecimiento de este protocolo es fundamental, y por eso los ochenta países que lo ratificaron no hicieron ninguna reserva. Se trata de un comité integrado por expertos nombrados por los propios países. Son veintitrés expertos que lo integran por regiones. Lo señalo porque pareciera que el comité fuera un grupo de gente reunida en una sala, aislada de la realidad y que pueden sacar resoluciones que perjudiquen a la República Argentina.

Estuvo muy bien fundamentado que el comité recomienda, que el comité objeta, que el comité dice y que no obliga a ningún país.

El artículo 17 de la convención dice que con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente convención, se establecerá un comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer compuesto, en el momento de entrada en vigor de la convención, de dieciocho, y después de su ratificación o adhesión por el 35º Estado parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la convención. Los expertos serán elegidos por los Estados parte entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal. Es coherente que un comité de estas características ejerza esa función a título personal pero que sea designado por los países.

Y cuando recorremos la integración de los países vemos que, como se plantea, es una integración proporcional. Porque el artículo 17 dice que se tendrán en cuenta la distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas jurídicos.

Por eso en el comité encontramos países latinoamericanos como Brasil, Jamaica, Cuba, México y que puede estar la Argentina —ya estuvo— en el próximo comité. Encontramos países de todo el mundo con la integración que tiene hoy las Naciones Unidas.

Me parece que por ello hoy no tenemos que aprobar o ratificar esto con temor sino con la confianza de que verdaderamente estamos dando un paso adelante. Y no solamente a partir de una convención que plantea programáticamente una aspiración de no discriminación hacia la mujer, porque sabemos que en las instancias cotidianas la mujer es discriminada permanentemente. En efecto, se la discrimina en el ámbito privado y también en el público. Y sabemos que la mujer hoy, a través de su participación política, es la que ha impulsado distintas leyes cuya aplicación permiten disminuir ese grado de discriminación que padecen desde comienzos de la historia.

Por eso, creo que tenemos que decirles a las mujeres que sigan avanzando; que estos son hechos positivos que han incluido una agenda nueva de temas en la política y que esta participación le hace bien a la democracia, porque promueve la igualdad, la justicia y una sociedad más justa. *(Aplausos en las galerías.)*

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: voy a ser breve.

Se dijo casi todo en este recinto. En realidad, quiero abordar sólo dos temas, que creo han quedado inconclusos. Porque se dijo acá: ¿Quién va a venir a decirnos a los argentinos lo que tenemos que hacer o lo que nos corresponde hacer; quién sabe más que el propio país las cosas que debe hacer?

Quiero volver a discutir el tema de la importancia de la comunidad internacional. Qué significa que en las últimas décadas se haya construido una comunidad internacional que empezó a comprender que todos aquellos temas vinculados a las violaciones a los derechos humanos son temas que horrorizan a la humanidad toda.

Empezamos a ponernos de acuerdo internacionalmente en que los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, son temas que nos atañen, nos importan a toda la comunidad internacional. Hoy estamos queriendo ratificar que somos parte de esa comunidad internacional que no relega la protección de los derechos humanos a la visión interna de un país y que aquello que consideramos imprescriptible y que afecta a toda la humanidad se va a defender en los ámbitos internacionales.

Digo esto, porque en alguna oportunidad nos hemos horrorizado con la jovencita que iban a apedrear en Nigeria por un caso de infidelidad; y la verdad es que la salvó la comunidad internacional; y lo mismo ocurre con las ablaciones de clítoris de mujeres africanas o con genocidios en otras partes del mundo. Por suerte, la comunidad internacional se horrorizó con los campos de concentración nazis y por suerte también se ocupó en algunos momentos de nuestro país.

Hace dos o tres semanas estuvimos en el Ministerio de Justicia. Allí se conmemoró la reedición del informe que durante la dictadura militar había hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando vino a la Argentina. Invitada por el ministro había una mujer a la que ese informe internacional le había salvado la vida; habían hecho pública su desaparición en el momento en que acá adentro decían que los

argentinos éramos derechos y humanos, cuando había 30 mil desaparecidos.

Entonces, uno no viene acá a decir “Salven a la Argentina”. Por suerte, la Argentina está transitando por uno de los mejores momentos de su historia en lo que a defensa de los derechos humanos se refiere. Venimos a ser parte y a ratificar la importancia de la comunidad internacional defendiendo los derechos humanos en el mundo, porque nos atañe a todos.

Dicho esto, la verdad es que iba a hacer un trabajo parecidísimo al que realizó la senadora Escudero, motivo por el cual me relevó de una gran parte de las recomendaciones que yo iba a leer, pero no quiero dejar pasar por alto algunas.

Se dijo que el Comité de Seguimiento había sugerido no festejar el Día de la Madre en Bielorrusia, entonces, fui a las recomendaciones. Y las recomendaciones respecto de Bielorrusia son que la mujer tenga la oportunidad de expresar sus opiniones y de participar en pie de igualdad. Preocupa al comité la falta de un entorno propicio en el país que impide la plena participación de la mujer; que se reconozca a la mujer como persona de derecho, a fin de realizar sus derechos humanos. Es más; expresa que es tan excesiva la supuesta protección sobre la mujer en el ámbito laboral que la mujer ocupa todos los niveles máximos de desempleo en Bielorrusia, porque se exalta sólo la imagen de mujer-madre. Se le pone tan excesiva protección –supuesta protección– que la mujer llegó a los más altos niveles de desempleo y pobreza en ese país. De hecho, el propio comité habla de que hay excesiva tolerancia en la sociedad respecto de la violencia sobre la mujer.

Asimismo, el comité expresa su preocupación respecto de la salud de la mujer a lo largo de todo el ciclo de su vida. Preocupa al comité la situación económica de la mujer, que se caracteriza por la pobreza, el desempleo y su desplazamiento del mercado de trabajo, inclusive en los sectores que dominaba anteriormente. Importa al comité que la mujer suele ocupar puestos con sueldos bajos y en los sectores inferiores del mercado y exhorta al gobierno a aplicar políticas relativas a paliar el desempleo de la mujer.

En Bielorrusia las mujeres no trabajan y quedan con sus chicas solas, sin protección social. Preocupa al comité la generalización

de la pobreza entre las mujeres. Allí dice que preocupa al comité la predominancia constante de exaltar la idea de la sola imagen del premio a la madre, porque se la saca también del mercado laboral.

Por lo tanto, no se está diciendo que no festejen el Día de la Madre, que las nenas o los nenes no les lleven los regalitos a las mamás. La verdad es que no se trata de esto. El problema de la mujer en Bielorrusia es gravísimo.

Por suerte, el comité puede tomar nota de la situación que está viviendo cada país en su especificidad. De esto se trata cuando las recomendaciones del comité se refieren a estos temas. No vino a la Argentina a decir “Miren, no festejen el Día de la Madre”. Por el contrario, está hablando de un enorme problema de discriminación de la mujer que ha quedado desempleada, fuera del mercado laboral y en la máxima pobreza.

Se habló también del tema de la legalización de la prostitución. En China, como lo mencionó la señora senadora Escudero, el comité se preocupa precisamente por la persecución de las mujeres prostitutas y, entonces, dice que se deja libres a los proxenetas, se criminaliza a la prostituta y se hace trata de mujeres. Al respecto, pide definición sobre la discriminación contra la mujer en la ley de la mujer. No hay leyes que protejan a la mujer de la discriminación.

Se pide que se le dé asistencia jurídica, para que puedan denunciar la discriminación. Se dice que le preocupan las diversas violencias contra la mujer china, incluida la violencia en las mujeres detenidas, el abuso sexual, la violencia en el hogar y la violencia en el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. Y también piden que investiguen a los funcionarios.

Precisamente, piden que se persiga a los proxenetas y habla de los informes recibidos, donde hay funcionarios que toleran la trata de mujeres y participan en ella. Piden que se investiguen los informes sobre la participación de funcionarios en la trata y explotación de prostitutas y les preocupa que la representación proporcional de las mujeres en las esferas de la vida pública sea bajísima en China. Esa es la preocupación del comité: los derechos humanos de las mujeres.

Lo mismo sucede en México. El comité específicamente recomienda al gobierno que examine sus próximos informes y pide que no se discrimine a las prostitutas sino que sancione a los proxenetas. Casi todos aquí debemos estar de acuerdo, salvo que me contesten que haya que criminalizar a la prostituta y liberar a los proxenetas.

Aborto: tema que plantearon varios senadores aquí. Como dijo la senadora Escudero, el comité se refirió en muchos casos a los problemas vinculados al aborto, porque en aquellos países en donde están despenalizados determinados tipo de aborto —como el terapéutico— efectivamente la mujer no tiene acceso a hacerlo cuando le está permitido por la legislación. Entonces, se pide que se cumpla con esas circunstancias.

Pero tengo una mala noticia. La verdad es que no estamos discutiendo el tema del aborto. Puede ser materia de otra discusión si consideramos que la solución de esta tragedia, que es la causa principal de muerte materna en la Argentina con 400 mil abortos clandestinos por año, es la cárcel para la mujer. Es decir, además de ser violada, sometida y vejada, tenemos que mandar a la mujer a la cárcel. Podríamos discutir —quisiera hacerlo— si esta tragedia la tratamos con el Código Penal.

Pero hoy tengo una mala noticia: este no es el tema que nos convoca. El aborto no está en la convención y no figura entre las recomendaciones del Comité. Allí se dice que deben cumplirse las normativas internas de cada país, para que cada mujer pueda ejercer los derechos que su propia nación le permite. De hecho, en las recomendaciones que hizo en el caso de Azerbaiján, el comité plantea específicamente evitar el uso del aborto como instrumento de planificación familiar y reducir la mortalidad materna debido a abortos realizados incorrectamente. Si algo no se hace, es plantear el aborto como forma de planificación familiar, como se dijo aquí.

Hoy estamos adoptando un Protocolo Facultativo; estamos manteniendo nuestra política de derechos humanos en el marco de una comunidad internacional que quiere tomar y defender los derechos humanos como hechos que afectan a toda la humanidad. Hay infinitos casos de violación de derechos humanos en las mujeres en prácticamente todos los lugares del mundo. Con la aprobación de este protocolo estamos

ampliando la ciudadanía, estamos permitiendo que se efectúen denuncias y observaciones y que si quieren venir al país, deban pedir autorización. Estamos permitiendo que se pueda hacer el seguimiento del cumplimiento de la Convención Internacional de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y que se hagan efectivos esos derechos.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel O. Scioli.

Sra. Ibarra. — Firmar una convención es posible; después hay que cumplirla. Es decir, hay que seguirla y hay que saber cómo se cumple aquello a lo que cada país se comprometió. De lo contrario, si no hay seguimiento, siempre nos quedamos, como dijo la miembro informante, en esta retórica donde todos los discursos son maravillosos y donde las mujeres siguen muriendo apedreadas.

La verdad es que, más que discutir o querer introducir aquí los monstruos que no hay, sepamos que hoy estamos haciendo una suma más a esta comunidad internacional que ha decidido tomar como propios, para siempre, la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente. — Para cerrar el debate, en primer lugar tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: me toca cerrar el debate en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical.

Por una cuestión filosófica, el debate cultural que se está planteando con relación a la aprobación o no de este protocolo, se vincula con una concepción doctrinaria de mi partido. En efecto, nuestra decisión de aprobar este protocolo facultativo se relaciona con las propias convicciones de la Unión Cívica Radical, de nuestro partido centenario.

En consecuencia, hablo en nombre de todos los hombres y mujeres del radicalismo que han hecho de la lucha por los derechos humanos una causa de vida. Digo esto, para ilustrar desde dónde hablamos y con qué compromiso lo hacemos.

Por otra parte, quisiera plantear algo que en algún caso se ha expuesto, pero que también se relaciona con un debate que subyace cuando

tratamos todos estos temas que se vinculan con los derechos humanos.

Como senador por la provincia de Jujuy también he recibido —al igual que los senadores Jenefes y Liliana Fellner— una carpeta bastante voluminosa con doce mil firmas y con una nota que encabeza el petitorio, por la que se me solicita que como senador de la Nación, en representación de mi provincia, rechace este protocolo facultativo. Sin embargo, no lo puedo hacer por convicción, justamente porque pertenezco a la Unión Cívica Radical.

En segundo término, tampoco puedo hacerlo porque este asunto —que ha servido también como instrumento para deformar una realidad y para desinformar a muchas mujeres de mi provincia— ha generado un largo debate que lleva varios años.

A raíz de una campaña de concientización que hicimos desde el radicalismo de mi provincia, el año pasado me tocó traer más de cinco mil firmas de jujeñas que, realmente, están de acuerdo con la aprobación de este protocolo facultativo. Y ello se logró luego de un proceso de debate y de información frente al esquema sistemático de desinformación que, como en mi provincia, seguramente existe en muchos lugares o distritos del país. Repito: el año pasado llegué con algo más de cinco mil firmas, adhesiones, a la aprobación del protocolo facultativo. Por lo tanto, es un tema que está generando un debate muy fuerte en todo el territorio nacional, particularmente —como se ha visto— en mi provincia.

A su vez —como bien han dicho el senador Gómez Díez y otros legisladores—, también recibí la petición de algunos referentes de la Iglesia en cuanto al rechazo de este protocolo facultativo.

Aclaro que yo soy católico y me siento parte de la Iglesia católica, a la que apoyo cuando con el compromiso social participa de situaciones institucionales extremas para poner límites al deterioro de la calidad institucional. No obstante, también como católico, soy consciente de que mi iglesia debe reformar algunas cuestiones y que tiene que actualizarse, al igual que algunos de sus referentes.

En ese sentido, he recibido especialmente el pedido del obispo Palentini, de la provincia de Jujuy, que casualmente tiene algunas posiciones

que no comparto, porque a veces se relacionan con lo político. Por ejemplo, antes de rechazar, ha salido a apoyar directamente una reforma de la Constitución de mi provincia. Posteriormente, con algunos otros referentes ha planteado la necesidad de que rechacemos no sólo este protocolo sino también la iniciativa que hemos tratado hace algunos días, referida a la ligadura de trompas y a la vasectomía. Personalmente le dije que no compartía su posición; me parece que tiene que haber un debate un poco más realista de algunas estructuras de nuestra organización social, particularmente, en la Iglesia católica.

Entonces, la verdad es que estamos ante un debate muy profundo en el seno de la sociedad argentina, que seguramente algunos tendremos que efectuar en ciertas situaciones, como ha planteado recién la señora senadora Vilma Ibarra.

En ese marco, con gran convicción venimos a apoyar este protocolo facultativo, respecto del cual aquí se ha tratado de minimizar su importancia. Sin embargo, la verdad es que no se trata de una mera norma que no va a servir para nada. No es que si adherimos o no, no ocurrirá nada, porque ya tenemos aprobada –con rango constitucional– la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer.

En verdad, la aprobación de este protocolo facultativo es muy importante, porque pone en vigencia –ni más ni menos– un sistema o mecanismo de garantía, para que justamente se cumplan los derechos aprobados con rango constitucional por esa norma. ¿Por qué? Porque establece un sistema de comunicaciones y de denuncias y también la aprobación de un procedimiento de investigación.

Aquí se han expresado muchas cosas. Rescato la información profunda que acaba de brindar la señora senadora Escudero, porque se ha generado mucha desinformación; y desde algunos sectores se lo ha hecho con mala fe. Muchas de las doce mil mujeres que en mi provincia han firmado en contra del protocolo ni saben bien de qué se trata. Realmente, han sido desinformadas. Se les han dicho estas cosas que hemos escuchado aquí...

–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Señor senador, le solicitan una interrupción...

Sr. Morales. – No, señor presidente; no concederé interrupciones.

Muchas de las cosas que se han escuchado aquí no tienen nada que ver con la realidad; son recomendaciones que no ha efectuado el comité internacional. Con gran contundencia y claridad la señora senadora Escudero ha desnudado la verdad en este recinto, aclarando cuál es el verdadero rol y función del protocolo facultativo y el verdadero beneficio en términos de garantías de derechos que tiene la aplicación de este protocolo.

Sin embargo, aquí se ha pasado por alto el articulado que estamos por aprobar. Este no contiene ninguna invasión sobre la soberanía nacional; nada que ver. Lo que aquí se está debatiendo es que hablamos de derechos de las mujeres, que son derechos humanos y que son derechos universales. (*Aplausos en las galerías.*)

Y nuestro país tiene que formar parte de la comunidad internacional, que está decidida a no convalidar el incumplimiento de las normas que tienen que ver con la protección de los derechos humanos. De esto se trata; de que nuestro país forme parte de esta comunidad internacional y de los organismos internacionales de protección de estos derechos.

Entonces, desde ningún punto de vista está en riesgo la soberanía nacional. Se trata de un tema que está por encima de los Estados, que tiene que ver con un derecho humano, que involucra derechos universales.

El artículo 1º del protocolo que estamos por aprobar establece que todo Estado parte reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2º. Y luego consta toda la parte normativa, en los primeros artículos, hasta el 8º y el 9º. En ese sentido, me parece que tenemos que efectuar una evaluación de estos dos artículos y de su importancia. Luego, los artículos que siguen tienen que ver con el primer objeto de la aprobación del protocolo, que es el sistema de comunicaciones y denuncias.

Ahora bien, el artículo 2º establece que las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado parte, de cualquiera de los derechos enunciados en la convención. Esta es una garantía de derechos y tiende a evitar que algún día venga un dictador democrático que no sea progresista y quiera avanzar sobre los derechos de las mujeres, y que este Congreso pueda impedirlo a través de esta norma.

Es decir, se pretende contar con las garantías del control internacional de un comité integrado por expertos, no por cualquiera que pasa por la calle y que se ha sentado en ese organismo a decir cualquier cosa. Este comité está haciendo las cosas bien y está dando las recomendaciones que hacen a las realidades que ocurren en cada país, en cada miembro parte. No se puede soslayar la importancia que tiene el comité para el cumplimiento de los derechos de la mujer como derechos humanos. Es muy importante lo que estamos tratando.

Es fundamental que se aprueben los artículos 8º y 9º, porque si bien se establece la posibilidad de que se haga alguna objeción sobre la aplicación de estos artículos, ello tiene que ver con el otro procedimiento relacionado con la investigación.

El artículo 8º dice: “Si el comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte [o parece que algunos no han leído el texto de los artículos 8º y 9º] de los derechos enunciados en la convención, el comité invitará a ese Estado parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información”.

El punto 2 de ese artículo que me parece es la médula del tema del sistema del procedimiento de investigación que establece el protocolo, dice: “Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado parte interesado, así como toda información fidedigna que esté a disposición suya, el comité podrá encargar a uno o más de sus miembros que realice una investigación y presente con carácter urgente un informe al comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del Estado parte, la investigación podrá incluir una visita a

su territorio”. Es decir que visitan el territorio con consentimiento del Estado parte pero sin perjuicio de esto es fundamental la aprobación del artículo 8º, porque a las comunicaciones y denuncias tiene que seguir un procedimiento de investigación para que este organismo que es supranacional, que es el que tutela, como garantía de derecho, los derechos humanos que son universales, vea qué es lo que pasa en cada uno de los Estados miembro para que no haya incumplimiento de los derechos de las mujeres y que acabadamente se cumplan los derechos que ha aprobado la convención.

Termino de leer el artículo 8º, porque me parece que ha sido planteado en reiteradas oportunidades y no queda en claro la importancia que tiene. El inciso 3 dice: “Tras examinar las conclusiones de la investigación, el comité las transmitirá al Estado parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas”. El inciso 4 establece: “En un plazo de seis meses después de recibir los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el comité, el Estado parte interesado presentará sus propias observaciones al comité”. Y el inciso 5 dice: “La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se solicitará la colaboración del Estado parte”.

Es el marco en que se plantea el artículo 8º y es la lógica que trae todo el protocolo, invitar al país parte con la participación del país miembro; inclusive, en virtud del artículo 19 el Estado parte puede denunciar a este protocolo. Es decir que bajo ningún punto de vista está en juego la soberanía nacional. ¿Quién dice eso? ¿Por qué no se leen como realmente hay que hacerlo los artículos 8º y 9º?

El artículo 9º, que es el artículo que algunos están objetando y que resulta fundamental en este protocolo, dice que el comité podrá invitar al Estado parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 18 de la convención —que tiene que ver con las medidas administrativas, legislativas que ella plantea— pormenores sobre cualquiera de las medidas que hubiere adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 8º, que acabo de leer. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4, el comité podrá, si es necesario, invitar al

Estado parte interesado a que le informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la investigación.

Es cierto, tal vez la Argentina se merezca algún tipo de recomendación; tal vez el comité nos diga: “Che, cuidado, hay 400 mil abortos anuales”, como dijo Vilma Ibarra. Y es una de las causas de mortalidad materna e infantil. Una de las causas más importantes de mortalidad materna son los abortos mal realizados, que reciben todos los hospitales y respecto de los cuales todos miramos para un costado.

Es muy posible que el comité nos diga qué hacen los Estados, cuáles son las políticas públicas que están aplicando los Estados para prevenir esa situación, evitar tantas muertes maternas y evitar que haya tantos abortos. Es posible que recibamos ese tipo de recomendación, tal vez merecida. Entonces, seguramente algún día, vamos a tener que dejar de eludir el debate que hay que entablar sobre verdades que ocurren.

La senadora Escudero ha dicho bien cuando hizo alusión a la cuestión de los falsos valores, señor presidente, a lo que yo agregaría la gran hipocresía que hay en algunos sectores cuando plantean el tema de la planificación familiar, de la procreación responsable, cuando se discutió el tema de la educación sexual en las escuelas, el de vasectomía y la ligadura de trompas, y también, cuando se discute este tema.

Como Congreso Nacional, señor presidente, no tenemos otro camino que preservar y garantizar derechos, los derechos de las mujeres, concretamente, y los derechos humanos, que son universales.

El radicalismo tiene una firme posición, de plena convicción y, por eso, quienes somos radicales nos sentimos orgullosos de que hombres y mujeres trabajen y hayan hecho una causa de la lucha por estos derechos humanos.

Señor presidente: lo lamento por quienes están desinformados. Creo que ahí tenemos una gran lucha, una batalla que es militante para todos los que comprendemos que, acá, respecto de los derechos humanos, tiene que haber una causa, que es la de informar bien, trabajar y dar la batalla cultural que tenemos que librar en la República Argentina.

Por eso, desde la Unión Cívica Radical, aprobamos este protocolo en todos sus términos,

tal como están en el dictamen original, que es el que estamos tratando, el de la minoría, que no tiene ningún tipo de observación y que no hace objeciones a los artículos 8º y 9º, en toda su extensión para que, de una vez por todas, garanticemos los derechos de las mujeres como derechos humanos. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. – Para cerrar el debate, tiene la palabra la senadora Perceval.

Sra. Perceval. – Señor presidente: prestigio parece que tienen los misterios, los mitos y los prejuicios; no quienes se empeñan en descifrarlos.

Muchas veces se dijo esto poniendo en valor lo femenino: la mujer es un misterio. Por esto es que, como andamos cerca de los misterios, los mitos y los prejuicios, agradezco las intervenciones de las senadoras que han tomado, punto a punto, las recomendaciones del comité sobre países específicos y situaciones concretas. Pero quiero tomar una fuente bibliográfica que generalmente no uso.

El diario “La Nación”, el 23 de febrero de 2005, tituló una nota editorial en la que se escribía sobre el protocolo “Un controvertido protocolo”. Y decía que está a consideración del Senado, una vez más, un inquietante protocolo internacional.

En realidad, lo que causa inquietud es tanta situación que ha vulnerado la letra, el espíritu y los derechos sustantivos que están en la Convención de Derechos Humanos de las mujeres y los instrumentos de exigibilidad contenidos en el protocolo facultativo.

Quiero aclarar, solamente por algo que se dijo en el recinto, que no es bueno cambiar las palabras de quienes las escriben y las firman. En el mensaje del Poder Ejecutivo, firmado por nuestro presidente, se dice y se resalta que la República Argentina, desde 1983, ha mantenido como política de Estado la protección y la defensa de los derechos de las mujeres y la aceptación de los mecanismos de supervisión de los derechos humanos. Además, indica que el protocolo es una herramienta que establece cuestiones de procedimiento que permitan mayor eficacia para reclamar derechos de las mujeres reconocidos en la convención y que se consideren afectados o vulnerados por un trámite pautado, y fija una serie de garantías a

los Estados parte, pero no modifica ni agrega nuevas disposiciones a la convención.

Finalmente, valora la aprobación del protocolo en términos de que significará un avance hacia el logro de la igualdad de derechos de oportunidades entre varones y mujeres, así como la garantía del pleno goce de los derechos humanos, eje central de la política de la actual gestión del gobierno nacional.

En segundo lugar, vamos a los mitos y los misterios. Sobre la familia y la maternidad ya hablaron las senadoras; lo mismo sucedió con la promiscuidad y el aborto –ya se aclaró el hecho de que no está mencionado–.

En cuanto a la prostitución, ya se dijo que el comité ha recomendado la promulgación de legislación penal que permita someter a juicio y sancionar penalmente a quienes explotan a las prostitutas y a quienes trafican con mujeres y niñas.

En cuanto a la soberanía, en realidad, el protocolo no crea ningún tribunal u organismo supranacional. Tampoco amplía las obligaciones de los Estados. La ratificación de un tratado internacional es un acto de soberanía que únicamente un Estado pleno puede realizar y no hay tratado que vaya contra ella. Estos órganos no son extranjeros como se cuestiona en alguna nota recibida, sino internacionales.

En fin, lo único que quiero enfatizar es lo que leí como problema sobre la recomendación N° 26.

Quiero decir que entiendo el valor de la profecía, pero la recomendación N° 26 no existe. Son 25 recomendaciones. De modo que todas las hojas que recibimos rechazando la recomendación N° 26 no tienen valor; y esto lo voy a adjuntar, más allá de que figura en Internet, y haré llegar a la Secretaría el texto completo de las 25 recomendaciones.

Mucho se ha dicho sobre la militancia del no y de sus actores. Pero en esta oportunidad quiero agradecer la militancia del sí y las miles de adhesiones que hemos recibido.

Me voy a permitir enumerarlas: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Amnesty International, Human Rights Watch (*aplausos en las galerías*), Plataforma del Movimiento Argentino de Mujeres y de Derechos Humanos por la Ratificación del Protocolo, formado por 31 organizaciones de mujeres y de organismos

de derechos humanos, CLADEM, Foro de Mujeres del Mercosur, DEFEM, Legislaturas provinciales, como las de Córdoba y Mendoza, Defensoría del Pueblo de La Matanza, Defensoría del Pueblo de Formosa, Mujeres de la CNP 25, Federación Tierra y Vivienda, Movimiento Evita, Barrios de Pie, Red de Mujeres Solidarias, Secretaría de la Mujer del Partido Socialista, Mujeres Radicales pro Derechos, Jóvenes por la Concertación y más de 40 mil personas que a lo largo de estos años –mayoritariamente mujeres–, nos dijeron sí a la ratificación del protocolo facultativo. Y son las que escriben, no sólo las que lo desean y lo necesitan.

Angeles Mastretta, a quien hemos leído, disfrutamos y leemos, en una entrevista dice que un periodista le preguntaba hace poco por qué a pesar de todo lo logrado las mujeres hacen sentir que no han conquistado la igualdad; ¿qué falta? Y Angeles contestó: “Falta justamente la igualdad”.

Entonces, señor presidente, señores senadores, señoras senadoras: una tranquilidad que compartimos en el movimiento de mujeres es que cuando las mujeres avanzan ningún hombre retrocede. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. – Se va a votar...

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: como ya votamos las inserciones, ahora voy a proponer que el proyecto se vote mediante una sola votación y que los senadores se pronuncien a favor o en contra.

Sr. Presidente. – De acuerdo.

Sr. Pichetto. – Entiendo que lo que se va a votar es la ratificación del acuerdo, sin ningún tipo de reserva ni consideración.

Sr. Presidente. – Se va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 32 votos por la afirmativa y 12 por la negativa. (*Aplausos.*)

–El resultado de la votación surge del Acta N° 13. ¹

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. ¹ Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Agradecemos la presencia de las funcionarias y de las damas presentes aquí y en el Salón Azul.

24

S.-3.940/06: DEUDORES HIPOTECARIOS

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre tablas que por Secretaría se enunciarán.

Sr. Secretario (Estrada). – Voy a leer los números de expediente: 3.501/06, 3.788/06, 3.344/06 y 3.482/06; 3.813/06, 2.569/06, 1.848/06, 3.745/06, 3.743/06, 3.476/06...

Sr. Fernández. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: las autoridades de los bloques han acordado tratar hoy el tema de los deudores hipotecarios, por lo que sugiero que se someta a consideración el tratamiento sobre tablas de ese proyecto, a efectos de que tenga sanción en el Senado en esta sesión, para remitirlo inmediatamente a la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. – Primeramente, se va a llamar para formar quórum.

–Así se hace.

Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda referido al expediente S.-3.940/06 sobre interpretación de las leyes 25.561, 25.798 y 26.084, estableciendo un procedimiento especial en protección de los deudores hipotecarios.

Sr. Presidente. – Hay quórum.

Se va a votar si se trata sobre tablas.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Se aprueba. ²

En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador Fernández, miembro informante.

Sr. Fernández. – Señor presidente: podemos decir que hemos transitado un largo camino para llegar a esta nueva oportunidad normativa por la que pretendemos poner un punto final en la discusión que se ha generado respecto de las leyes que se dictaron como consecuencia de la emergencia pública en materia, social, económica, administrativa, financiera y cambiaria que tuvo lugar en la República Argentina y que fue normada por la ley 25.561, sus modificatorias, complementarias y, después, la ley 25.798, que pretendió brindar una adecuada protección de la propiedad privada destinada a vivienda única.

Debemos decir también que con posterioridad a la sanción de la ley 25.798 hemos sancionado prórrogas y en este recinto se han efectuado encendidas defensas discursivas respecto de cuál era la finalidad de las normas sancionadas, cuál era el bien jurídico protegido y cómo debían haber sido interpretadas estas normas a la luz de los distintos pronunciamientos judiciales.

También es cierto que transitamos por distintas etapas y en algunas se pretendía satisfacer la demanda de los acreedores a través de requerir al Estado un esfuerzo adicional.

Abandonada esa posición, tratamos de establecer normas que fueran interpretadas correctamente por la Justicia. Y en las distintas reuniones de comisión hubo diversos planteos para que esta ley interpretativa y aclaratoria abarcara otros aspectos que los que originariamente había abarcado.

Dijimos antes y decimos ahora que todos sabemos que este gobierno no fue el responsable de las medidas económicas ni financieras que se llevaron adelante en el país y que obligaron a la posterior declaración de emergencia. Todos también sabemos que no fue este gobierno el que generó las políticas que impusieron pérdidas de las fuentes de trabajo y empleo y empobrecimiento de la sociedad en su conjunto. Pero debemos coincidir en que este gobierno, esta Cámara de Senadores juntamente con la Cámara de Diputados, emprendimos resolver las consecuencias que esta crisis generó, lo cual significó brindar una adecuada protección a los sectores más débiles.

–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, senador José J. B. Pampuro.

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de su entrada en vigor, este Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio instrumento de ratificación o de adhesión.

ARTICULO 17

No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo.

ARTICULO 18

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Protocolo presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas, el Secretario General comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas y les pedirá que notifiquen si desean que se convoque una conferencia de los Estados Partes para examinar las propuestas y someterlas a votación si un tercio al menos de los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará bajo los auspicios de Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por toda enmienda anterior que hubiesen aceptado.

ARTICULO 19

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arreglo al artículo 2, o cualquier investigación iniciada, con arreglo al artículo 8, antes de la fecha de efectividad de la denuncia.

ARTICULO 20

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados:

- Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo;
- La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo y cualquier enmienda en virtud del artículo 18;
- Cualquier denuncia recibida en virtud del artículo 19.

ARTICULO 21

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el artículo 25 de la Convención.

VOTACION NOMINAL - 124º PERIODO LEGISLATIVO - ORDINARIO - 24ª SESION

PROYECTO DE LEY APROBANDO EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, EL 6 DE OCTUBRE DE 1999.

(PE-852/04)

VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 13

Fecha: 01-11-06

Hora: 21:20:15

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI Daniel

Desempeate: NO

Presentes Identificados: 44

Votos afirmativos: 32

Presentes No Identificados: -

Votos Negativos: 12

Total Presentes: 44

Abstenciones: -

Ausentes: 28

Votos Afirmativos Necesarios: 23

RESULTADO de la VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votación Nominal

124º Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión

PROYECTO DE LEY APROBANDO EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, EL 6 DE OCTUBRE DE 1999.

(PE-852/04)

VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas

Acta Nº: 13

Fecha: 01-11-06

Hora: 21:20:15

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI Daniel

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
BASUALDO, Roberto Gustavo	NEGATIVO	MARINO, Juan Carlos	AUSENTE
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AUSENTE	MASSONI, Norberto	AUSENTE
CAPARROS, Mabel Luisa	AUSENTE	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	NEGATIVO
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Aníbal	AUSENTE	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MERA Mario Ruben	AUSENTE
CLOSS, Maurice Fabián	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	NEGATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	PAMPURO, José Juan Bautista	AFIRMATIVO
ESCUADERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AUSENTE
FELLNER, Liliana Beatriz	NEGATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AUSENTE
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	NEGATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIOJA, César Ambrosio	NEGATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AUSENTE
GIRI, Halde Delia	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	NEGATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	NEGATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	NEGATIVO	SALVATORI, Pedro	AUSENTE
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AUSENTE
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AUSENTE
JAQUE, Celso Alejandro	NEGATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	NEGATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia	AUSENTE	URQUIA, Roberto Daniel	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itatí	AUSENTE	VIANA, Luis Alberto	AUSENTE
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	VIGO, Elida María	AUSENTE
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	VIUDES, Isabel Josefa	AUSENTE
M. PASS de CRESTO, Laura	AUSENTE	ZAVALIA, José Luis	AUSENTE